SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO PROVINCIAL DEL DIA 26 DE ENERO DE 2018

En la Ciudad de Salamanca, a las nueve horas del día veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Corporación Provincial para celebrar Sesión Ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Iglesias García y con asistencia de los Vicepresidentes 1º Don Carlos García Sierra y 2º Doña Isabel Mª de la Torre Olvera y de los Diputados, Don Julián Barrera Prieto, Don Marcelino Cordero Méndez, Don Francisco Javier García Hidalgo, Don Manuel Rufino García Núñez, Don Román Javier Hernández Calvo, Don Jesús María Ortiz Fernández, Doña Eva María Picado Valverde, Don Alejo Riñones Rico, Don Antonio Luís Sánchez Martín, Don José María Sánchez Martín, Doña Mª del Carmen Ávila de Manueles, Don José Francisco Bautista Méndez, Don Carlos Fernández Chanca, Doña Mª del Carmen García Romero, Don José Lucas Sánchez, Don Antonio Luengo Hernández, Doña Beatriz Martín Alindado, Don Francisco Martín del Molino, Don Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez, Don Manuel Hernández Pérez y Don Gabriel de la Mora González que son veinticuatro Diputados de los veinticinco que son los que de hecho y de derecho componen la misma, asistidos por el Secretario General Don Alejandro Martín Guzmán, estando presente el Interventor Don Manuel Jesús Fernández Valle.

No asistió a la sesión el Diputado D. Jesús Luís de San Antonio Benito.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete.

Y la Corporación, por unanimidad de los veinticuatro Diputados presentes de los veinticinco que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial, acuerda prestarle su aprobación.

2.- RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA DESDE EL DÍA 11 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017, NÚMEROS 5163 AL 5890.

En cumplimiento y a los efectos previstos en el art. 62 del R.D. 2568/1986, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Presidencia se da cuenta de las

Resoluciones adoptadas por la misma, desde el día once al veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, números del cinco mil ciento sesenta y tres al cinco mil ochocientos noventa.

Y la Corporación se dio por enterada.

RATIFICACIÓN SOBRE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE PUNTOS NO DICTAMINADOS PREVIAMENTE EN COMISIÓN INFORMATIVA, EN LA FECHA DE CONFECCIÓN DEL MISMO.

Por la Presidencia, se somete a ratificación del Pleno Provincial nueve puntos incluidos por razón de urgencia en el Orden del Día, al amparo de lo que establece el artículo 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sin que estuvieran dictaminados previamente en Comisión Informativa en la fecha de confección del citado Orden del Día:

- Propuesta aprobación bases Convocatoria entre los municipios de la provincia con población inferior de 20.000 habitantes para la formación del Plan Provincial Bienal 2018-19 para la Cooperación Económica a las Obras y Servicios Municipales.

- Proposición del Grupo Popular de esta Diputación para apoyar y defender la prisión permanente revisable.

- Proposición del Grupo Socialista de esta Diputación sobre medidas para la lucha contra la despoblación.

- Proposición del Grupo Socialista de esta Diputación sobre la coordinación necesaria por inclemencias meteorológicas.

- Proposición del Grupo Socialista de esta Diputación para la mejora de la calidad de vida de los pacientes de diabetes en Castilla y León, mediante la implantación de sistemas de monitorización continua de glucosa.

- Proposición del Grupo Socialista de esta Diputación sobre la lista de espera del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

- Proposición del Grupo Ciudadanos de esta Diputación para la creación de un nuevo Reglamento de Protocolo.

- Proposición del Grupo Ganemos Salamanca de esta Diputación para la revisión de los acuerdos entre la Junta de Castilla y León y las Entidades Financieras sobre la Sequía.

- Proposición del Grupo Ganemos Salamanca de esta Diputación para reclamar un nuevo marco normativo de protección animal en Castilla y León.

Y la Corporación, por unanimidad de los veinticuatro Diputados presentes de los veinticinco que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial, acuerda ratificar la inclusión en el Orden del Día de este Pleno Provincial de los puntos aludidos y en consecuencia proceder al debate de los mismos.

3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA CON POBLACIÓN INFERIOR DE 20.000 HABITANTES PARA LA FORMACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL BIENAL 2018-19 PARA LA COOPERACIÓN ECONÓMICA A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión Informativa de Fomento, aprobado por mayoría:

“Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de Cooperación y Planes Provinciales de fecha 19 de enero de 2018.

Visto el informe del Interventor nº 4/2018, de 23 de enero.

Y visto el informe complementario de la Jefa de Servicio de Cooperación y Planes Provinciales de fecha 25 de enero de 2018.

La Comisión Informativa, por mayoría, con los votos a favor de los siete representantes del Grupo Popular, cuatro del Grupo Socialista y uno del Grupo Ciudadanos y la abstención del representante del Grupo Ganemos Salamanca, propone al Pleno Provincial la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. - Que el cumplimiento de la obligación de publicidad de la Convocatoria formulada, se efectúe en el Boletín Oficial de la Provincia y Sede Electrónica de la Diputación y en consecuencia se procede a la modificación de las Bases de Convocatoria.

Segundo. - Aprobar las Bases que regulan la convocatoria para la formación del Plan Provincial Bienal (2018/2019), de la Diputación de Salamanca para la cooperación económica a las Obras y Servicios municipales, que constan de quince folios útiles por una de sus caras, sellados, numerados y rubricados por el Secretario General.

Tercero. - Ordenar su inserción en el B.O.P. en diarios de difusión local y en Sede Electrónica de la Diputación Provincial para su publicación.

Cuarto.- Aprobar la puesta en funcionamiento del procedimiento electrónico, así como la tramitación electrónica del mismo a través del Registro Electrónico de la Diputación de Salamanca y de su sede electrónica y la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la propia sede electrónica.

Quinto.- Facultar al Presidente para la ejecución de lo acordado.”

Se da cuenta de las siguientes enmiendas presentadas por el Grupo Ganemos Salamanca:

“PRIMERA.- No subvencionar actuaciones no encaminadas a satisfacer los servicios mínimos cuando éstos no se encuentren todavía cubiertos.

Consideramos que no es aceptable que se sigan realizando año tras año suministros continuos de abastecimiento de agua mediante cisternas en lugar de afrontar la realización de las infraestructuras necesarias que permitan acabar con dicha situación. No se debería invertir ni un solo euro en otra cuestión antes que en el aseguramiento de la prestación del servicio de abastecimiento de agua.

No podemos aceptar, igualmente, que se subvencionen, por ejemplo, pistas polideportivas, frontones, pistas de pádel o piscinas, mientras haya ciudadanos en nuestra provincia que no tengan servicio de agua, o de alcantarillado, o que tengan que pisar barro al salir de casa, porque la calle no esté pavimentada.

Por todo ello, es rechazable que se subvencionen actuaciones diferentes a los servicios mínimos obligatorios en aquellos municipios que no tienen cubiertos tales servicios adecuadamente, debiendo la Diputación rechazar aquellos proyectos que pretendan financiar dichas actuaciones, en cuanto el municipio no asegure los servicios mínimos a sus vecinos y vecinas; sólo cuando esto suceda deberían poder acceder a financiación o subvenciones en metálico o en especie para destinar los fondos a otros servicios.

De igual modo, habrá de realizarse un mayor esfuerzo inversor en aquellos municipios que presenten un déficit superior en estas infraestructuras básicas.

SEGUNDA.- Modificación de los criterios de reparto.

La Base 6ª de la convocatoria establece como criterios de reparto la población de derecho municipal, la situación de las infraestructuras y equipamientos, la dispersión de la población y la inversión mínima de 26.000€. Sin embargo, en la conformación efectiva del reparto no se tiene en cuenta la situación de las infraestructuras y equipamientos. El resto de criterios utilizados son objetivos, pero no equitativos y además no contribuyen a cumplir con la obligación de la Diputación de asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y la

asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión (art. 31.2 y 36.1 LBRL).

En consecuencia, proponemos que el principal criterio de reparto sea la carencia de infraestructuras de servicios mínimos obligatorios detectada a través de la Encuesta de Infraestructura o de otras herramientas objetivas de detección de necesidades locales. Si bien se cita genéricamente tal criterio en la base 6ª.I.2, no se toma en consideración en la práctica (Anexo 0). Su peso no debería ser inferior al 50%.

Un segundo criterio puede ser el poblacional y de dispersión, favoreciendo a los municipios de menor población.

Un tercer criterio a considerar debería ser la capacidad económica del municipio, valorada a través de su liquidación anual de ingresos ordinarios. Sabemos que la capacidad económica de los municipios es muy dispar en función de su patrimonio, de la existencia de recursos que generan cánones, de la actividad económica presente en el término, de la propia extensión del término, etc. Este criterio debe tomar en consideración, además, de en relación inversa el menor esfuerzo fiscal exigido a sus vecinos.

Las bases establecen el mínimo en 26.000 euros y los municipios a los que resulta de aplicación tal mínimo son numerosos. Tal cuantía es claramente insuficiente para abordar la ejecución de un gran elenco de obras y supone un sobre coste a la hora de su contratación, puesto que los costes fijos y de desplazamiento de maquinaria para tan escasa inversión conducen a que las empresas presenten ofertas más elevadas proporcionalmente que para obras similares de mayor presupuesto.

Por ello, consideramos que, para las actuaciones encuadrables en los servicios mínimos recogidos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, la inversión mínima ha de ser de al menos 30.000 euros. No obstante, el otorgamiento de la subvención estará condicionada en todo caso al cumplimiento de los requisitos antedichos.

Además, debe revisarse la Base 6ª.4 de la Convocatoria, que otorga a todas las inversiones el carácter de plurianual, pues tal condición complica la tramitación administrativa, produce retrasos en los pagos y puede encarecer la contratación.

TERCERA.- Integración de las distintas líneas de subvención dirigidas a municipios en los Planes Provinciales de Cooperación.

Proponemos que al menos el crédito previsto para el Plan de Apoyo Municipal y las subvenciones directas de Presidencia se integren en el Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal. La razón es que a dispersión de las líneas de subvención conlleva un mal uso de los fondos públicos en varios sentidos:

- La atomización de las actuaciones encarece los costes de contratación por el principio de la economía de escalas.

- Cuantas más actuaciones se realicen más expedientes se tramitan, demandando un mayor esfuerzo tanto para los Ayuntamientos como para la Diputación, aumento de la burocracia y reducción de eficiencia.

Además, algunas líneas de subvención a municipios no responden a criterios objetivos ni de equidad, como las que hemos ido observando se han concedido de forma graciosa desde Presidencia, entendemos que por razones puramente de favoritismos políticos, de modo que la integración en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de Competencia Municipal serían una forma de garantizar el cumplimiento de tales principios con mayor eficiencia y equidad.

CUARTA.- Eliminación de la distinción entre municipios de más de 1.000 habitantes y aquellos que no los superan.

Se establece una diferenciación entre municipios de más de 1.000 habitantes y de menos de 1.000 con el criterio de que los “mayores de 1.000 habitantes, tienen una importante repercusión económica y social en su entorno próximo, al establecerse en ellos equipamientos comarcales tales como: centros de enseñanza, centros sanitarios, instalaciones deportivas, etc... que los convierten en motor del desarrollo provincial”. Sin embargo, por un lado, encontramos instalaciones del tipo mencionado en municipios con menos habitantes; por otro lado, el hecho de disponer de algunas de estas instalaciones no presupone que se permita o sea factible su uso por habitantes de otros municipios vecinos; y, además, por el hecho de tener algunos de los centros mencionados ya tienen una mayor participación en los ingresos del Estado. Además, se utiliza el concepto “comarcal”, mientras que algunos de los municipios incluidos en la relación no tienen este carácter comarcal.

Se trata de una división artificial que no responde a criterios objetivos, de modo que proponemos la eliminación de tal distinción.

QUINTA.- Extensión de la condición de beneficiarias a las Entidades Locales Menores.

Las entidades locales menores están dotadas de personalidad jurídica propia y facultades para gestionar sus bienes y servicios. Se les asignan competencias para administrar y conservar su patrimonio, así como para ejecutar obras y servicios de su interés.

La mayor parte de estas ELM carece de un convenio con el Ayuntamiento del que dependen, que regule el régimen de financiación, que permita garantizar una mínima autonomía financiera para atender los servicios de la comunidad vecinal y la dotación de las infraestructuras necesarias. En muchos casos existen tensiones y desencuentros entre

el Ayuntamiento y la ELM, que habitualmente conllevan una carencia de financiación para estas últimas.

Nos encontramos con ELM que no disponen de los servicios mínimos básicos, cuando el núcleo principal sede del Ayuntamiento del que dependen tiene cubiertos todos sus servicios y disponen de unas infraestructuras más que aceptables. Es claro que en estos casos se produce un abandono y abuso de posición por parte del Ayuntamiento correspondiente. No obstante, la Diputación tiene la obligación de asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, razón por la que debe adoptar medidas que permitan que tales servicios lleguen también a las ELM.

Proponemos como una de estas medidas la modificación de la Base 3ª de la Convocatoria, para permitir la participación como beneficiarias directas a las Entidades Locales Menores en los Planes Provinciales de Cooperación, adaptando el resto de bases a las peculiaridades de estas entidades y su afección con respecto al reparto a asignar a los municipios en que se integran.

SEXTA.- Subvencionar los costes de elaboración de los proyectos de ejecución y adaptación de la aportación municipal.

Estos costes suponen un esfuerzo importante para los Ayuntamientos y consideramos que es un gasto subvencionable, pues define la obra a ejecutar. Actualmente se prevé que la Diputación sólo asuma este gasto cuando a la vez contrata la obra (Base 7ª.3).

No hay razón para castigar a los ayuntamientos que deseen ejecutar las obras por sus medios, de modo que la Diputación debe asumir también en esos casos el coste de redacción de los proyectos. No obstante, consideramos que tal modificación debe constreñirse para aquellas actuaciones que estén comprendidas como servicios mínimos en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Esta discriminación no queda resuelta con la posibilidad de incluir los gastos de redacción en el Plan de Apoyo Municipal, puesto que en tal caso se está mermando en igual cuantía la disponibilidad económica para otros fines subvencionables con tal Plan, limitación que no tienen los municipios a los que tal coste se asume directamente por la Diputación.

Por otro lado, el plazo establecido para presentar los proyectos y demás documentación técnica exigida en la convocatoria es excesivamente corto cuando se trata de obras a contratar por los ayuntamientos (Base 12ª y 15ª.2.2.A).

SÉPTIMA.- Reducir la burocracia.

En la convocatoria se establece una larga lista de documentos a aportar por los ayuntamientos tanto para la solicitud como para la posterior justificación de la contratación y ejecución de las inversiones, así como una diversidad de trámites a realizar en las distintas fases en que se ordena la aprobación y ejecución del Plan.

Consideramos que se configura un sistema de relación interinstitucional complicado e innecesariamente extenso que debe ser objeto de simplificación. Esta burocracia excesiva genera un trabajo innecesario tanto al personal de los Ayuntamientos como a los propios servicios provinciales.

Debe simplificarse tanto la tramitación de los procedimientos como el número de documentos a presentar por los Ayuntamientos.”

Toma la palabra D. Gabriel de la Mora González para manifestar que se presentaba este asunto como uno de las políticas más importantes de la Diputación y así era, pero también demostraba que la Diputación era una institución inútil en los términos en que se planteaba la convocatoria, dado que los criterios que se establecían no generaban una intervención de la Diputación en cuanto a los fines que eran los de asegurar la prestación de los servicios esenciales a todos los ciudadanos. Y ello, porque ni siquiera la encuesta de infraestructuras se utilizaba como criterio, por lo que los ayuntamientos entenderían a su juicio, que esta convocatoria la pudiera hacer el Estado o la Comunidad Autónoma, puesto que si la Diputación no cumplía con los criterios legales a los que se hallaba sometida que era la prestación de servicios mínimos a los vecinos, la misma existencia de la Diputación quedaba cuestionada.

A su juicio, los criterios de reparto deberían estar presididos por el hecho de asegurar la prestación de servicios mínimos a los vecinos, con independencia del color político del municipio, por ello su primera enmienda consistía en que la Diputación no debía subvencionar actuaciones mientras no estuvieran satisfechos los servicios esenciales como el agua, el pavimento u otras semejantes. El segundo criterio que entendía que debía ser la Encuesta de Infraestructura, a través de la que se debía primar como criterio a la carencia de infraestructuras de servicios mínimos obligatorios, un segundo criterio puede ser el poblacional y de dispersión, favoreciendo a los municipios de menor población y el tercer criterio a considerar debería ser la capacidad económica del municipio y esfuerzo fiscal exigido a los vecinos; en cuanto a la cuantía mínima ellos propusieron el ejercicio anterior 30.000 euros, se había subido este año a 26.000, pero ellos seguían manteniendo su propuesta.

Por otra parte, consideraba necesario reducir la burocracia y la discrecionalidad y la arbitrariedad en la concesión de subvenciones a los municipios, por ello proponían que el plan de apoyo municipal y las subvenciones directas a municipios que podían ser más de un millón de euros, pasaran a planes provinciales, se ganaría en eficiencia. Además, pedía se redujera la documentación que se exigía tanto para presentar solicitudes como

para justificar la subvención lo que facilitaría la gestión de los ayuntamientos y de la propia Diputación. Finalmente, proponía la eliminación de la distinción entre municipios de más de 1.000 habitantes y aquellos que no los superan, pues con sus criterios se superaría esa división. Otra propuesta era que junto con los municipios fueran también beneficiarias las Entidades Locales Menores. Y por último que los municipios que contraten obras, vean subvencionados por Diputación el coste de redacción, eliminando la discriminación existente actualmente, porque si contrataba la Diputación si se subvencionada el proyecto.

Por todas las razones apuntadas su modelo era totalmente alternativo contrario al que planteaba el grupo de gobierno que no cumplía con las previsiones legales y que solucionaría mucho mejor los problemas de la provincia y por eso su voto sería en contra de la propuesta. Concluyó criticando las formas en las que se había tramitado el expediente, pues después de dos años podrían haberse discutido algunas cuestiones que podrían haber mejorado la convocatoria.

Interviene D. Manuel Hernández Pérez y comenzó criticando de manera constructiva las formas, pues se habían tenido dos años para poder mejorar los coeficientes que se aplicaban a algunos municipios penalizados por la despoblación y que por la baja densidad veían reducidos sus ingresos y probablemente, en próximas convocatorias verían reducidas las aportaciones de Diputación. El haber establecido un nuevo coeficiente hubiera beneficiado a muchos municipios y hubiera sido interesante en algunas de las enmiendas introducidas por el Sr. de la Mora. Veían bien el incremento de la inversión, aunque lo veía insuficiente para intentar mantener la población. Criticó la situación de las Entidades Locales Menores, por el hecho de que sólo se tenía en cuenta aquellas que tenían al menos 12 habitantes y le parecía injusto con el resto que tuvieran menos población, pues tenían que mantener igualmente las infraestructuras sin recibir subvención, por eso ellos habían propuesto bajar el número de habitantes.

Finalizó diciendo que su voto sería favorable, pues era importante que las inversiones llegaran cuanto antes a los municipios, en forma de alumbrados, abastecimiento, saneamiento...etc. y poder mantener la calidad de vida y la población de los mismos.

D. Francisco Martín del Molino manifestó que ellos estaban a favor del programa y de las subvenciones, pero absolutamente en contra de cómo se había efectuado la gestión político-administrativa desde la delegación, gestión que calificó “made in PP”.

En las bases, criterios y ordenanza de la convocatoria anterior, la del bienio 2016-2017 de Planes Provinciales, el Grupo Socialista votó a favor porque después de tiempo de conversaciones y aportaciones conseguimos mejorar las bases y que se incluyeran nuevos criterios que el tiempo ha demostrado como muy positivos, me estoy refiriendo por ejemplo, a la disminución de porcentajes en la aportación por parte de los ayuntamientos y muy especialmente de los municipios pequeños, que se contemplaran obras de nuevas tecnologías, que las bajas redunden y se apliquen directamente en los

municipios donde se produce la baja. Por la inclusión de esas propuestas efectuadas por el Grupo Socialista y alguna más que aportaron otros grupos políticos, voto a favor. Todo lo aprobado y contemplado en la convocatoria anterior se consolida en ésta y además se aumenta la inversión, por lo cual, haciendo lógica política, el Grupo Socialista va a votar a favor.

Pero también seguimos reivindicando asuntos pendientes y que seguimos denunciando aspectos de su gestión que nos parecen muy lamentables, muy nocivos para el desarrollo de la provincia. Y lo más lamentable y más nocivo es que se nos hurte la posibilidad de seguir mejorando las bases de este importantísimo programa y eso es lo que ustedes han hecho con esta tramitación tan lamentable.

Miren ustedes, hay otras propuestas que efectuamos hace dos años y no se incluyeron lo que le parecía normal pues todo no se podía contemplar, ni se contemplan en estos Planes de Inversiones; parece lógico que el dinero de esta Diputación sirva para solucionar en un municipio de 500 habitantes un problema en la red de abastecimiento de agua antes de invertir en otro de cincuenta habitantes en una pista de pádel, pues aunque estaba el principio de la autonomía local, habría que primar por racionalidad obras como la del ciclo del agua por encima de otras como la referenciada del pádel. Otra cuestión que su grupo consideraba importante era el ser más reivindicativo con la Junta de Castilla y León y la Administración Central para que volvieran a aportar lo que aportaban hacía años y habían dejado de aportar.

Miren ustedes, hace más de medio año el Grupo Socialista, presentó una moción en la que pedíamos que se agilizara la convocatoria de los planes provinciales y por su importancia se debería trabajar en este asunto, sin embargo, esa moción aprobada por todos había sido olvidada y no se había vuelto a hablar de ella. Miren ustedes, señores del PP, estamos muy necesitados de diligencia en la gestión política y ustedes nos están ofreciendo negligencia. Estamos muy necesitados de trabajo y ustedes nos obsequian con pereza.

Nosotros vamos a seguir votando a favor, los intereses de la provincia, de sus municipios y el bienestar de sus ciudadanos está por encima de quien lo gestiona. Ustedes presentan estos planes de inversiones, y por eso digo que ustedes nos lo ponen muy difícil, antes de informarnos de ellos a los grupos de la oposición y realmente esto no tiene ninguna justificación, porque si lo hacen por lo urgente de estos planes, deberían ustedes haberlo hecho con urgencia, es decir rápidamente, por ejemplo después de la aprobación de la moción presentada por este grupo e incluso informan a los ayuntamientos detallando la cantidad que le corresponde en el plan bienal, antes de informar y debatir con la oposición. Y que ocurría si esas cantidades hubieran cambiado. En política era muy importante el fondo, pero también las formas y ustedes han sido muy poco respetuosos con la oposición y, por tanto, con los ciudadanos de Salamanca.

Pero por si todo lo demás no fuera suficiente en el colmo de la mala, nos traen hoy media hora antes de la celebración del Pleno a la comisión informativa el expediente para

que lo estudiemos, propongamos, modifiquemos y dictaminemos hoy media hora antes del Pleno. Esto lo hacen con el programa más importante de la Diputación de Salamanca, cuando ustedes saben desde hace más de dos años.

En la convocatoria anterior como señalé anteriormente se introdujeron aspectos novedosos que el tiempo ha demostrado positivos, en esta ocasión a nosotros nos hubiera gustado debatir con el fin de ir mejorando la convocatoria y actualizándola a las necesidades reales se incluyeran aspectos como la potenciación en la inversión en el grupo I antes de invertir en obras menos básicas como señalé anteriormente; que se incluyera la extensión del núcleo urbano a la hora de señalar inversión, que se primara la inversión en ciclo hidráulico y que se fuera más reivindicativo con Junta de Castilla y León y la Administración Central pues no era de recibo que estas no presupuestaran ni un euro para este plan. Pero todo ello y todo este interesante y necesario debate, por su mala gestión en la tramitación no ha sido posible; no ha sido posible casi ni enunciarla, como para ser estudiada, valorada y posiblemente mejorada. En cualquier caso, en nuestro afán de mejorar este importantísimo programa ahí dejamos estas propuestas que nos parecen importantes de presente y por supuesto de futuro. No obstante, dejaba enunciada sus propuestas que le parecían importantes de presente y futuro

Toma la palabra D. Antonio Luís Sánchez Martín que comienza diciendo que no sabría si con el tiempo disponible tendría suficiente, pues eran muy extensas las intervenciones de los portavoces. En primer lugar, agradeció el apoyo del PSOE y Ciudadanos a los planes, que eran un instrumento fundamental de cooperación con los municipios para el sostenimiento de los servicios públicos necesarios. También agradecía las propuestas que había efectuado el Sr. de la Mora González, aunque con muchas de ellas no estuviera de acuerdo, en especial, en lo relativo a la posición sobre la autonomía local, y le había sorprendido la postura del Sr. Martín del Molino en este aspecto, ya que no era tónica del Grupo Socialista cuestionar ese principio. Añadió que respecto a las alusiones del Sr. del Molino sobre pereza y falta de trabajo del grupo de gobierno, lo cierto era que las únicas propuestas presentadas eran las del Grupo Ganemos. Añadió que veía crispado al Sr. del Molino y no sabía si era porque no le gustaba la inversión que se aprobaba, que era importante y había que ponerla en relación con el plan de apoyo municipal, con el plan de sequía, el de optimización energética, que sumaban más de 20 millones de inversión con fondos propios en los municipios; era una cifra récord e implicaba gestión. Se había criticado en su día por amortizar deuda, sin embargo, los frutos se veían hoy, con el dinero que se liberaba para inversión, más de 20 millones. No sabía si lo que no le gustaba era el que se hubiera comunicado a los ayuntamientos el reparto de las cantidades, cuando él creía que eso lo habían agradecido porque les ayudaba en la confección de los presupuestos al saber la cifra con la que contaban. No entendía pues cuales eran los motivos por los que estaba disgustado.

Respondiendo al Grupo Ganemos señaló respecto a su propuesta de no subvencionar actuaciones no encaminadas a satisfacer los servicios mínimos cuando éstos no se encuentren todavía cubiertos, que como ya le había dicho con anterioridad estimaba que los municipios eran mayores de edad y no necesitaban tutelas para saber dónde

invertir. Por otra parte, la cobertura de servicios mínimos estaba cubierta prácticamente al 100%, cuestión distinta era que esos servicios hubiera que renovarlos por paso del tiempo u otras circunstancias y por último con el paso de los años la tipología de servicios que establecía la Ley de Bases había quedado obsoleta, por ejemplo, se había convertido en servicio esencial la casa consistorial, el mantenimiento del consultorio médico y sin embargo, no eran servicios mínimos. En cuanto a la modificación de los criterios de reparto manifestó que, como ya había señalado el Sr. Martín del Molino, hacía dos años que tras un debate profundo, se habían modificado los criterios y estimaba que ahora no podían cambiarse las reglas de juego, y que los criterios debían durar, al menos, un mandato para no crear en los ayuntamientos incertidumbres.

Respecto a los criterios planteados algunos como la extensión de los cascos urbanos eran subjetivos pues cada municipio alega un criterio que le beneficia, como ese o la despoblación u otros, pero, a su juicio, había que mantener unos criterios objetivos válidos para todos los municipios. Sobre Integración de las distintas líneas de subvención dirigidas a municipios en los Planes Provinciales de Cooperación, era coherente con su línea de actuación, pero estimaba que el plan provincial y el plan de apoyo local, aunque tenían cierta complementariedad lo cierto era que su objeto era la creación de empleo y por tanto distinto del objeto de los planes provinciales. Por otra parte, la eliminación de la distinción entre los municipios de más o menos de 1000 habitantes, perjudicaría a los municipios menores.

Referente a la extensión de la condición de beneficiarias a las Entidades Locales Menores, no estaban de acuerdo pues éstas tenían competencias muy limitadas, no tenían capacidad de contratar y siempre tendrían que contar con el municipio de pertenencia.

En cuanto a subvencionar los costes de elaboración de los proyectos, eso podría hacerse a través del plan de apoyo municipal, con el plan no se podría hacer legalmente, pues si se delegaba la obra el ayuntamiento debía asumir los costes de honorarios y dirección de obra, por ser promotor. Sobre la reducción de la burocracia, tomaba nota y, aunque no era el momento, lo tendría en cuenta en la modificación de la Ordenanza.

Finalizó diciendo que lamentaba el malhumor del Sr. Martín del Molino por esta convocatoria y agradeciendo el apoyo tanto del Grupo Socialista como el de Ciudadanos.

El Sr. de la Mora González manifestó que iba a ser breve, pero pedía que el Sr. Presidente tuviera en cuenta que los demás portavoces habían tenido más tiempo y debía tener eso en cuenta. Añadió que iba a responder al Sr. Sánchez Martín y manifestó su sorpresa ya que las críticas efectuadas por él, también las habían reiterado los portavoces de los grupos y sin embargo votaban a favor.

Respecto a la cuestión de los servicios mínimos y el respeto de la autonomía municipal, dijo que si era así la postura que se mantenía ¿para qué servía la Diputación?, la convocatoria podría hacerse por el Estado o la Junta sin ninguna estructura intermedia. Sin embargo, la ley encomendaba a la Diputación la asistencia para la implantación de

los servicios mínimos de los municipios y en estos podía haber discrepancias lo que se traducía en que servicios básicos no se ejecutaran y como la Diputación no actuaba las situaciones se prolongaban durante años y eso era una clara dejación de funciones, pues todos se lavaban las manos. Y si se decía que la clasificación de la ley estaba obsoleta, proponía una moción urgente para que se cambiara. Se había dicho que para otros servicios o para los ya obsoletos estaba el plan de apoyo, y por eso ellos solicitaban más inversión y convocatorias específicas para esos casos, sin embargo, todo ello no invalidaba su propuesta. Sobre los criterios de reparto, no era aceptable la regla del mantenimiento de los cuatro años, ya que si las propuestas eran buenas ¿por qué no implementarlas?, lo otro no le parecía razonable, pues si no se quería cambiar no deberían hacerse dos convocatorias, con una de cuatro años valdría.

Referente a la subjetividad de los criterios, preguntó ¿qué había más objetivo que la encuesta de infraestructura que la costeaba Diputación? y señalaba las carencias de los municipios. Añadió que él no había hablado de la extensión de los municipios, sino de carencia de infraestructuras, dispersión poblacional y capacidad económica del municipio. En cuanto a la integración de las distintas líneas de planes, no le había respondido nada de las subvenciones directas, casi dos millones, que el grupo de gobierno prefería entregar a dedo, de forma discrecional y arbitraria, en lugar de integrar en los planes. Sobre la eliminación de los municipios de más y menos de 1.000 habitantes, con los criterios que ellos utilizaban los menores se convertirían también en dinamizadores y recibirían más inversión.

En lo relativo a las Entidades Locales Menores era cierto que debía primarse a los municipios con varios núcleos y que debían contar las entidades con los municipios, pero podrían surgir discrepancias que hacían que no se cubrieran los servicios mínimos, como era el caso de Mozodiel y había que sacar conclusiones de ese caso y tenerlas en cuenta.

Sobre el abono de los costes de los proyectos por los municipios, era una discriminación, a su juicio, pues, aunque acudieran al Plan de apoyo, utilizaban un dinero que otros no tenían que utilizar. De la burocracia era una necesidad sentida por todos y habría que trabajar en ella teniendo en cuenta la novedad de la administración digital y su influencia. Por todo lo anterior mantenía su voto en contra.

El Sr. Hernández Pérez respondiendo al Sr. de la Mora González dijo que votaban a favor por responsabilidad y por la necesidad de inversión que tenían los municipios, a partir de ahí discrepaban con el grupo de gobierno el que se mantuvieran las reglas cuando se estaba en constante cambio y había que cambiar cuando cambiaba la sociedad y las circunstancias como era la despoblación. Discrepaba en la aplicación de los coeficientes, que había que cambiarlos para favorecer a los municipios más perjudicados. Era cierto que los municipios tenían autonomía, pero también había que cubrir los servicios mínimos. Por todo ello creían que podía haberse destinado más inversión y había un punto que, aunque no lo habían enmendado, pero creía que lo iban a tener en cuenta, como era el de la rebaja de la población de los núcleos para tenerlos en cuenta en cuanto a la

inversión y esperaba que en futuros planes se tuviera en cuenta. Por todo ello votarían a favor de los planes.

El Sr. Martín del Molino respondiendo al Sr. de la Mora González señaló que votaban a favor por responsabilidad, porque los municipios necesitaban la inversión y porque la inversión era importante, aunque les parecía que debía ser mayor. Ellos conocían la realidad de los municipios y sabían de sus carencias, el Sr. de la Mora lo desconocía porque carecía de representantes y por eso no sabía de lo que hablaba cuando señalaba las necesidades de los municipios. También señaló en cuanto a los tiempos de intervención que debía tener en cuenta el número de representantes que tenía en los municipios y los que tenían los demás y estimaba que el tiempo no debía ser el mismo, aunque no quería entrar en ese debate.

Añadió que él no estaba ni crispado, ni cabreado, ni malhumorado y lo que le preocupaba era que confundiera el tono reivindicativo con el enfado. Tampoco debía confundir la corrección con sumisión y no iba a aceptar propuestas que él no consideraba razonables. Ellos a pesar del poco tiempo habían hecho propuestas en comisión ¿pero eso iba a cambiar los criterios que el grupo de gobierno tenía ya previstos? Por otra parte, ellos no estaban en contra de la autonomía municipal, sino que lo que había dicho era que con el dinero de Diputación había que primar más la ejecución de servicios públicos. Lo que si percibía con la intervención del Sr. Sánchez Martín era que venía a confirmar su conformismo y pereza con que actuaba el grupo de gobierno y todas sus actuaciones las consideraban históricas y todo era un éxito, debido a su buena gestión. A ustedes le es lo mismo FITUR, INTUR, acontecimientos deportivos, Feria Ganadera, IFESA o Salamaq o el Plan de Empleo y por supuesto los Planes Provinciales y como diría don Jesús María Ortiz “no hay peor ciego, que el que no quiere oír”.

Miren ustedes, ¿no es histórico de verdad que en el Siglo XXI por su gestión en esta provincia en los diez últimos años se hayan perdido 20.000 habitantes?, ¿no es histórico que 26.000 salmantinos estén buscando empleo?, ¿no era histórico que hayan necesitado ser abastecidos por camiones cisternas? o que la inversión de este cuatrienio sea inferior que la del 2008/2011, donde se invirtieron 46 millones y ahora 36, o que en el bienio actual se hubieran invertido 20 millones y en el 2010/11 se invirtieran 25. Era también histórico que a día de hoy muchos municipios tuvieran problemas en nuevas tecnologías y que a día de hoy estuvieran sin invertir 50 millones de euros. Estos eran datos reales, al igual que el capítulo VI que gestionaban los ayuntamientos estaba ejecutado al 70% y el capítulo VII que gestionaba la diputación el 30%.

Insistió en que ellos habían hecho propuestas que estimaban mejorarían las bases y habían reclamado tiempo para debatirlas y la respuesta del grupo de gobierno era el continuismo, la satisfacción y la autocomplacencia y ellos pensaban que la gestión era mala y que estaban muy necesitados de trabajo y el grupo de gobierno ofrecía pereza.

Interviene el Sr. Sánchez Martín y dijo que él quería ser breve, pero tenía que contestar a todos los portavoces. Respondiendo al Sr. de la Mora González sobre el

cambio de las reglas de juego si se mejoraba, eso era subjetivo, pues si se cambiaba el criterio del casco urbano, se mejorará para un municipio, pero se empeorará a otros y eso era lo que no se podía hacer a mitad de la partida para no introducir incertidumbres, y el utilizar este criterio si era subjetivo. No se podía hacer un plan a cuatro años porque al contar sólo con fondos de Diputación era difícil prever ese tipo de escenario, por eso son bienales, aunque lo mejor era hacerlos cuatrienales.

Contestando a Ciudadanos señaló que recogía su propuesta sobre núcleos de población para mejorar la financiación de los núcleos reduciendo la población de 12 a 10 habitantes y la llevarían a la convocatoria. En cuanto a las aportaciones municipales se habían bajado hacía dos años y estaban al mínimo, en algunos casos en el 2% y la ley establece que los municipios debían colaborar.

En respuesta al Sr. Martín del Molino manifestó que en su primera intervención le había parecido crispado y en la segunda más moderado, aunque al final había sacado su vena demagógica mezclando datos a su conveniencia. Añadió que ya se primaban los servicios básicos con una aportación municipal muy inferior a los equipamientos, lo que no iba a hacer era decir a un ayuntamiento lo que tenía que hacer, pues ellos saben mejor lo que deben hacer. En cuanto a la alusión de conformismo preguntó si ¿era conformismo el aumentar un 25% los planes provinciales y de 6 a 8 millones el plan de apoyo municipal? Cada año se mejoraban los planes de inversiones para los ayuntamientos, gracias a la amortización de la deuda se estaba en unos niveles de inversión que no se tenían otros años ¿era eso conformismo y negligencia o mala gestión? Los datos eran los que eran, aunque el Sr. del Molino no los quisiera reconocer.

En cuanto a que se invirtiera menos en este cuatrienio dijo que no fuera ventajista y no hiciera trampas, ya que a las cantidades totales del cuatrienio 2008/2011 había que detraer las aportaciones municipales que eran no del 2%, sino del 30% y para los municipios más grandes del 45% e invitaba a que una vez hecho eso lo hiciera público. Además, señaló que en el cuatrienio 2008/2011 no había otros planes como el plan de apoyo municipal dotado con 8 millones y lo podían unir a los planes provinciales, pero eso no lo querían los ayuntamientos, pues no querían tantos fondos condicionados, para poder contratar trabajadores o hacer frente a otros gastos. Había mezclado el capítulo VI con el VII. Las obras delegadas iban al VII, por lo que el dato que había dado podía ser al contrario. Por ello invitó al Sr. Martín del Molino a que se pasara por el Servicio de Planes Provinciales y allí le explicarían la gestión para que no tuviera confusiones.

Tras el debate, el dictamen que antecede fue aprobado por mayoría, con los votos a favor de los trece Diputados del Grupo Popular, los nueve del Grupo Socialista y uno del Grupo Ciudadanos y con el voto en contra del Diputado del Grupo Ganemos Salamanca.

4.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR DE ESTA DIPUTACIÓN PARA APOYAR Y DEFENDER LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición presentada por el Grupo Popular de esta Diputación:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable.

Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal.

La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, "un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal".

La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la Exposición de Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado". Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social".

Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión".

Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional

del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)".

Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable.

Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.

Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles.

Por todo ello, el Grupo Provincial Popular presenta la siguiente **MOCIÓN**:

Primero.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Segundo.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable.

Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes de Castilla y León y a la Junta de Gobierno de la FEMP.”

D. Gabriel de la Mora González intervino para decir que no entendía como el Grupo Popular traía estas mociones al pleno que calificó de populismo punitivo. Era una moción sobre un asunto que no era competencia de los municipios y cuyo fin era el

desprestigiar a la oposición, visibilizar su soledad en el Congreso y colocarse como adalid de la cadena perpetua.

Recordó cuáles eran, a su juicio, los fines de las penas y así manifestó que era la prevención general, mediante la disuasión y la prevención especial, mediante la reinserción; la represión era tener en cuenta la gravedad del delito para calcular la pena.

Todas estas finalidades estaban recogidas en la legislación española, pero una presidía en esta materia en la Constitución y era la reinserción en la sociedad para evitar la comisión de delitos. Y esta medida era justo lo contrario, había que avanzar hacia la justicia restaurativa y poner el foco en la víctima y la restauración del daño causado y no en la duración de la pena. La cadena perpetua era un modo arcaico basado en la venganza. Este era un sentimiento que quería capitalizar el PP ante ciertos hechos que sucedían en el país con menos criminalidad de toda Europa. El PP venía a traer miedo a la gente y por eso justificaban esta pena frente al derecho internacional humanitario. Ese miedo que justificaba que siguieran en el poder a pesar de los escándalos que les salpicaban. Si se aceptaba la cadena perpetua sólo quedaría después asesinar a las personas que querían encerrar de por vida. Ese era el camino al que llevaba este tipo de populismo. Por todo ello votaría en contra.

Toma la palabra D. Manuel Hernández Pérez quien manifiesta:

“En estos momentos se tramita en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pide derogar la prisión permanente revisable y que fue admitido a trámite con los votos favorables del PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas, que entre todos reunían la mayoría absoluta de los votos de la Cámara para sacarlo adelante por sí solos.

Ciudadanos no votó a favor de derogar la prisión permanente revisable. Nos abstuvimos porque entendimos que su tramitación no era prudente, debido a que actualmente la prisión permanente revisable se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, debido a que, como ya advirtió numerosos juristas y expertos penalistas, podría ser una medida inconstitucional, por ser contrario al principio de reinserción consagrado en el artículo 25 de la Constitución.

En Ciudadanos queremos que se garantice el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en los crímenes de especial gravedad que atentan contra la dignidad del ser humano, como los asesinatos de menores, de personas con discapacidad o acompañados de una violación.

No estamos en contra de la prisión permanente revisable, pero esta pena por sí misma no garantiza el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. De hecho, es posible que un condenado a prisión permanente revisable esté en la calle con un tercer grado a los 15 años. Algo impensable si se exige el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas como defendemos desde Ciudadanos. En esa línea irá la reforma al Código Penal que próximamente exigiremos al gobierno.

En Ciudadanos estamos convencidos de que la justicia debe dotarse de todos los medios legales necesarios para ser realmente eficaz, pero nunca cayendo la improvisación ni bordeando la constitución, sino garantizando el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.”

D^a Carmen García Romero inició su intervención manifestando en nombre de su partido la solidaridad con las víctimas y sus familiares que habían sufrido casos de asesinatos y otros similares, pues nadie tenía derecho a quitar la vida a nadie. Como habían dicho los anteriores portavoces, era una moción oportunista, populista y malintencionada, una moción articulada por el Partido Popular a nivel nacional, para ocultar los casos de corrupción del partido, utilizando lo peor que podía utilizar un político, que era el dolor ajeno y el miedo de las personas para distraer. Esta moción la iban a presentar en toda España y era una moción que mentía a sabiendas sobre lo que era la prisión permanente revisable, pues no mejoraba lo que ya recogía el ordenamiento jurídico español. Éste ya recogía antes de la reforma de 2002 los cuarenta años de cárcel por asesinato y éste unido a violencia y robo, podía llevar a una pena de 125 años de prisión, de los que debería cumplir 40 años, no pudiendo revisarse la pena antes de los 35 y sin poder pasar al primer grado antes de los 32. Eran estas unas penas más duras que la que planteó la reforma del Partido Popular del 2002. Lo que si era cierto era que el objetivo que tenía el ordenamiento jurídico era la reinserción del reo y en esa posición estaría su partido. Le sorprendía la moción cuando el PP hacía un mes había felicitado a los grupos de izquierda por apoyar el tratamiento de los reos de violencia de género, parecía que a unos sí a otros no había que reinsertarlos. Finalizó diciendo que el PP que tachaba en ocasiones de populismo las propuestas de los partidos emergentes, con esta moción les habían copiado y lo peor de todo era que estaban utilizando el dolor ajeno, por lo que pidió que rectificasen y retiraran la moción.

Toma la palabra D. Carlos García Sierra para manifestar que se había asistido allí a lo que denominó ley del embudo, lo ancho para la oposición y lo estrecho para ellos y parecía mentira que en una sociedad democrática no se pudieran defender posturas, que cuando eran presentadas por la oposición era lo que quería la gente y si lo presentaban ellos era populismo punitivo. Los que habían sacado este asunto no habían sido ellos, sino los que habían vuelto a sacar la modificación de una ley aprobada en 2015 con el objeto de desgastar a un gobierno que no les gustaba. Aclaró que ellos no mentían, sino que los que no daban argumentos eran los portavoces que habían intervenido. Lo cierto era que se trataba de una pena extraordinaria y se trataba de una prisión permanente y revisable, se aplicaba a supuestos de extrema gravedad tasados expresamente en la ley. Dio lectura a los mismos y añadió que era bastante restrictiva, luego nada de populismo punitivo, ni de cadena perpetua, como había dicho el Sr. de la Mora González. Este debate no tenía nada que ver con el del cumplimiento íntegro de las penas y además eran compatibles. No se renunciaba con este tipo al mandamiento constitucional ni se oponía a la reinserción del penado, pues quedará a juicio del tribunal que valorará las conductas y si no se cumplían los requisitos seguiría en prisión hasta una nueva revisión y en otro caso, se produciría la libertad provisional tal y como establece la ley. Era además una ley plenamente constitucional avalada por el Consejo Fiscal, el CGPJ y el Consejo de Estado,

donde estaban consejeros socialistas. Recordó que, aunque el TC había admitido un recurso de inconstitucionalidad, lo cierto era que se admitían extradiciones a países con penas similares, luego entendía que no se trataban de penas inhumanas. Señaló que los portavoces habían eludido decir que éste era un instrumento de escasa utilización, aunque conveniente para casos extremos y que estaba vigente en países de nuestro entorno como Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania o Suiza y los tribunales internacionales la habían considerado ajustada a la Convención Europea de Derechos Humanos al igual que el Tratado de Roma.

Con todo lo anterior, quería dejar claro que si hoy se debatía este asunto no era porque el PP lo hubiera provocado, sino que lo habían provocado los que querían derogar la prisión permanente derogable y que no se trataba de populismo punitivo, pues era una figura perfectamente definida en otros países que no tenían nada de antidemocráticos y por último, estaba avalada por órganos constitucionales.

El Sr. de la Mora González para responder al Sr. García Sierra manifestó que ellos también podrían presentar una moción para que a los grupos políticos que se hubieran financiado ilegalmente se le endurecieran las penas y se podrían presentar con mociones contrapuestas, pero estimaba que ellos estaban allí para otras cosas, como solventar los problemas de la provincia, no para hablar de la corrupción del Partido Popular o para hablar de la cadena perpetua. Pero ya que se planteaba así el debate, él iba a hablar de cadena perpetua pero no con sus argumentos sino con los argumentos de los expertos. Así se decía que la introducción de esta pena venía motivada por la presión de los lobbies las asociaciones de víctimas del terrorismo, que el PP había utilizado. No existía argumento para la introducción de esta pena pues había arsenal punitivo suficiente en el estado, siendo además el ordenamiento español el que más penas regulaba, en el país que menos delitos se cometían, por lo que no podía explicarse en ninguna razón de política criminal. Cuando se argumentaba que otros países regulaban la cadena perpetua, se omitía que se hacía con carácter simbólico pues en la práctica nunca se aplicaba y puso varios ejemplos de países como Bélgica, Francia, Suiza, Dinamarca...etc, ya que a partir de 15 años en prisión era imposible la reinserción, por lo que a su juicio el extender la prisión más allá de ese plazo era contrario a principios humanitarios. Citó a Enrique Gimbernat, Catedrático de Derecho Penal, como ejemplo de crítica de que el Código Penal, en este asunto, era de los más crueles de Europa.

Finalizó diciendo que, desde el Código Penal de 1995, se habían producido 27 reformas con un único objeto, el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos y la reforma iba en contra de todo sentido humanitario y concluyo diciendo que no dijeran que este tipo existía en otros países pues no era cierto y ninguno iba más allá de 15 años.

El Sr. Hernández Pérez recordó que su grupo se había abstenido al estar recurrida la ley ante el TC y por tanto podría estar afectado por inconstitucionalidad, por eso su propuesta de reforma iba en el sentido de garantizar el cumplimiento de las penas. Por todo ello se abstenía.

La Sra. García Romero señaló que para embudo el suyo y se remitió al recurso que iba a interponer el Gobierno ante el TC contra la propuesta de nombramiento del Sr. Puigdemont, en contra del informe del Consejo de Estado, calificando el informe de preceptivo, pero no vinculante, y sin embargo, en el debate se había presentado como argumento de validez de la prisión permanente el informe del Consejo de Estado.

Ellos defendían el resarcimiento y los derechos de las víctimas y sus familias, pero no podían confundir resarcimiento con venganza, era ésta una línea fina que los partidos deberían respetar. Había dicho el Sr. de la Mora González, y así era, que España es un país muy seguro, sólo por detrás de otros seis países, lo que significaba que el sistema funcionaba, sobre todo la prevención y en esa línea debían trabajar todos los partidos para lograr un buen sistema de prevención de delitos y había que trabajar en políticas de educación social. Por ello más que fijarse en las penas había que trabajar en la prevención.

El Sr. García Sierra manifestó que el recurso que había interpuesto el gobierno estaba pactado con el Secretario General del PSOE D. Pedro Sánchez, y reiteró que cuando había hablado de la ley del embudo, se refería a que la oposición cuando presentaba propuestas que no tenían nada que ver con la provincia, era lo que quería la gente y si lo presentaban ellos, era populismo punitivo, y deberían saber que según las encuestas, ocho de cada diez españoles, estaban a favor de la prisión permanente revisable. Ante hechos violentos las autoridades deben proteger a la sociedad y por otra parte propiciar la reinserción por eso se hablaba de prisión permanente revisable que no era algo ajeno a los ordenamientos jurídicos europeos y pidió al Sr. de la Mora que revisara sus datos, dado que en Italia se habían dictado 1.584 sentencias, en Bélgica se dictaban 20 al año y en España desde que había entrado en vigor la reforma, sólo se había dictado una sentencia a una persona que asesinó con una radial a sus dos hijas, por lo que entendía, que el que intentaba meter miedo no eran ellos, sino el Sr. de la Mora. La prisión permanente revisable era una pena avalada por órganos internacionales de derechos humanos y si hoy venía al pleno era porque determinados grupos de la oposición intentaban derogar la reforma de 2015, no porque se vaya a aprobar de nuevo.

Criticó la propuesta de Ciudadanos de cumplimiento íntegro de las penas pues si eran más de 40 años, podría ser inconstitucional, luego era una medida lanzada para quedarse al lado, aunque no colaba.

Reiteró que ocho de cada diez españoles estaban a favor de la prisión permanente revisable y aunque estaba de acuerdo en que una de las finalidades de la pena era la rehabilitación, otras dos eran la de ser justos con las víctimas y dar seguridad a la sociedad, las finalidades, pues eran rehabilitación, reparación prevención y por eso antes de plantear la libertad de una persona habrá que comprobar que se ha rehabilitado, por eso esta figura era conveniente, constitucional y por eso la apoyaban ahora y en 2015.

Finalizó pidiendo al Sr. de la Mora González que tuviera cuidado al hablar, pues había dicho que nuestro Código Penal era de los más severos y nuestro país de los más justos y suponía que algo tendría que ver una cosa con la otra.

Tras el debate, la propuesta que antecede fue aprobada por mayoría, con los votos a favor de los trece Diputados del Grupo Popular, con los votos en contra de los nueve Diputados del Grupo Socialista y uno del Grupo Ganemos Salamanca y con la abstención de un Diputado del Grupo Ciudadanos.

5.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ESTA DIPUTACIÓN SOBRE MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición presentada por el Grupo Socialista de esta Diputación:

“Todas las fuerzas políticas y agentes sociales coincidimos en que uno de los grandes problemas por los que atraviesan nuestro territorio es la despoblación. Nuestros pueblos ya, y dijo YA, se han despoblado y envejecido. Durante este proceso hemos estado estudiando, haciendo análisis, etc.

Desde nuestro grupo pensamos y estamos convencidos que el momento de los estudios y de los análisis se terminó. Es momento de actuaciones y medidas que actúan sobre esta sangría de población.

Somos conscientes de que las medidas que se tomen no van a tener un efecto inmediato, pero también nos reafirmamos, cada día que pasa, en que si no se ponen medidas ya no se va a solucionar nada porque no tendremos nada que solucionar.

Se han constituido mesas en la que se han puesto encima de las mesas numerosas medidas para implantar en el medio rural, que se han quedado en eso en propuestas, mediante esta moción lo que pretendemos es que se lleven a cabo y se materialicen dichas propuestas. Para ellos proponemos a instar algunas de las administraciones que las deben de poner en marcha, pero sobre todo queremos que las propuestas que dependen de la diputación Provincial se ejecuten, hay algunas puestas en marcha pero quedan muchas por ejecutar.

Las Diputaciones Provinciales deben de jugar un papel esencial en esta puesta en marcha, como institución más cercana al territorio, y desarrollando el papel que le confiere su constitución ser el apoyo a todos los ayuntamientos que componen nuestro territorio.

Por lo que proponemos la adopción de los siguientes acuerdos:

- Instar a la Junta de Castilla y León a realizar acciones de formación profesional ocupacional y continua y adquisición de competencias en el sector agrario que permita mejorar la empleabilidad en dicho sector y empoderar a sus profesionales.

- Que se establezcan por parte de la Comunidad Autónoma mecanismos de incentivo al emprendimiento empresarial en la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

- Impulsar desde la Diputación Provincial la Formación No Reglada como fórmula eficaz de promoción personal y social de los jóvenes, para lo cual se desarrollarán actividades formativas con el objetivo de formar a más jóvenes en los sectores primarios, de creación autoempleo y turísticos de nuestra provincia.

- Instar a la Junta de Castilla y León a que se promuevan beneficios fiscales específicos para el medio rural, entre otros:

a. Deducción en el IRPF por adquisición de vivienda en núcleos rurales.

b. Mayor cuantía, para el medio rural, de la deducción en el IRPF por alquiler de vivienda habitual.

c. Mayor cuantía de las deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos para los residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.

d. Tipos reducidos en el Impuesto sobre Sucesiones cuando se trate de adquisición de explotaciones agrarias.

e. Tipos reducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de viviendas por jóvenes en núcleos rurales.

- Instar al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León a revisar el modelo de financiación de las entidades locales con el criterio de que los municipios que sufran mayor índice de despoblación no salgan perjudicados, y que estos salgan beneficiados en el reparto de los fondos de financiación destinados para ellos. Al igual que introducirlo como variante en el reparto de los diferentes fondos de diputación.

- Instar al gobierno a que incorpore en la regulación del sistema financiero la obligación de las entidades bancarias a garantizar el acceso a este sector por parte de los ciudadanos del medio rural.

- Establecer desde la Diputación provincial una línea de ayuda de autoempleo en el sector forestal y en actividades como apicultura, madera, micología, resina, etc.

- Instar a la Junta de Castilla y León a garantizar los servicios públicos a los ciudadanos del mundo rural en las mismas condiciones que a los del medio urbano, como son consultas de atención primaria, educación obligatoria, educación de 0-3 años, transporte público, geriátricos, ayuda a domicilio, centros asistenciales, residencia, centros de día, etc... con una descentralización de los servicios, que además de una prestación igualitaria del servicio permitirán crear empleo en el territorio.”

D^a Carmen García Romero intervino para decir que hasta ahora se venía hablado sobre si en un futuro más o menos lejano España se despoblaba y ellos creían que esa eventualidad ya había sucedido y la provincia de Salamanca estaba envejecida y

despoblada y era el momento de analizar la situación y así los jóvenes abandonaban el mundo rural por falta de futuro, al igual que los niños, pues carecía de los servicios básicos de educación obligatoria y los mayores porque ni siquiera tenían médicos al que acudir. Los vecinos habían abandonado el mundo rural por la falta de servicios básicos que habían venido propiciado por las políticas del Partido Popular. Pero hoy no quería reprochar nada, sino hacer una serie de propuestas en positivo para poder repoblar nuestros pueblos, eran propuestas recogidas de las conclusiones de diferentes foros y de mesas establecidas por la Junta de Castilla y León y quería que la Diputación fuese una parte esencial en la puesta en marcha de estas medidas, como órgano de exigencia y control con la administración autonómica y estatal. Las medidas que proponían eran de carácter social, económico y de asociación y por eso presentaban la moción.

Interviene D. Gabriel de la Mora González y señaló que estaba de acuerdo y apoyaba la moción y que tal y como señalaban los expertos a partir de cierta línea era muy difícil dar la vuelta a la situación y no sólo era necesaria la implicación de la Junta y del Gobierno Central sino también de las Instituciones europeas y habría que incidir lo que fuera preciso, pues la despoblación era el principal problema de las regiones y provincias del interior.

Toma la palabra D. Manuel Hernández Pérez quien manifiesta:

“Como bien dice la ponente se han debatido en diferentes foros uno de ellos es el documento que se aprobó en la comisión de despoblación de la FEMP en abril de 2017, pero otras fiscales en los que entendemos que ya se están llevando a cabo desde la Junta, gracias a los acuerdos PP-Ciudadanos en los presupuestos 2018. Ya ha habido una reducción para el 2018 por el tema de sequía en cuanto a los módulos agrarios. En el impuesto de sucesiones el mínimo exento se ha elevado a los 400.000€ y la empresa agraria la reducción es del 99%. Reducción de transmisiones patrimoniales del 20%. Deducción en el IRPF en 300€ más de los actualmente existentes por el primer hijo. Deducción del 15% al 20% de las cantidades satisfechas con carácter general y desde el 20% al 25% cuando la vivienda esté en el mundo rural. Para revisar la financiación de las entidades locales, hay que revisar la financiación autonómica y por lo tanto dejar de firmar cuponazos vascos. Nuestro grupo se va a abstener, porque consideramos que parte de esta moción se lleva a cabo con la aprobación del presupuesto de la Junta de 2018.”

D. Antonio Luís Sánchez Martín intervino para decir que este era un problema complejo que acuciaba no sólo a la sociedad española sino a la europea que no se podía combatir con unas cuantas medidas sino hacerlo de forma integral y por eso las administraciones se habían puesto a ello. Había un informe elaborado por el Senado en la legislatura pasada y otro más reciente, en el seno de la FEMP en el año 2017, previo acuerdo del PP y PSOE, ya que Ciudadanos había preferido no mojarse y no estar presentes en la FEMP, acuerdo, al que la Sra. García Romero no había hecho referencia. Por ello pedía a la ponente, como ya se había hecho en otros sitios como Burgos, el sumarse a las 75 medidas acordadas en el seno de la comisión de la FEMP en las que estaban todos de acuerdo y que eran medidas importantes en materia financiera, de

vivienda, institucionales...etc. Eran medidas más ambiciosas y donde se recogía el papel de las diputaciones reforzando a las mismas en este asunto. Por eso y por parecerle más completo, le ofreció un acuerdo adhiriéndose a las 75 medidas aprobadas por la FEMP.

La Sra. García Romero dijo que ellos no tenían ningún problema en asumir como propuesta los acuerdos alcanzados en la FEMP, pero habían entendido del debate anterior que había que elevar al pleno propuestas que afectaran a la provincia y todas las propuestas que estaban en su moción eran medidas propuestas por la Junta de Castilla y León en las mesas contra la despoblación, no había ninguna propuestas por ellos al margen y se traían porque las consideraban de vital importancia y que unas tenían un desarrollo a corto y otras a medio y largo plazo y eran 250 medidas, lo malo era que la Junta las había aprobado para el periodo 2010-2015 y hasta ahora no se habían puesto en marcha ninguna, aunque ahora Ciudadanos presumiera de que eran ellos los que las ponían en marcha. Por eso traía la moción y traería más, pues esa falta de acción la había sufrido el medio rural en forma de despoblación, pues las políticas del PP les llevaban a todos a la desesperación y a la desaparición.

El Sr. Hernández Pérez refiriéndose a la Sra. García Romero señaló que las políticas no se habían llevado a cabo porque antes no estaba Ciudadanos, a partir de ahora si se llevarían a efecto. Al Sr. Sánchez Martín le dijo que no formaban parte de la FEMP pero sí de la FREMP.

El Sr. Sánchez Martín manifestó que había quedado claro que el motivo de la moción no era plasmar el acuerdo alcanzado en la FEMP sino meter el dedo en el ojo al grupo de gobierno de la Diputación y de la Junta, es decir, sacar una ventaja política y no afrontar el problema real de la despoblación. Reiteró que el acuerdo de la FEMP proponía 75 medidas y algunas de las que había señalado en la moción estaban dentro del acuerdo, como era el comercio de proximidad y eran medidas que se iban a proponer a las distintas administraciones y medidas que reforzaban el papel de las diputaciones. Algunas cuestiones mencionadas en la moción ya las estaba ejecutando la Diputación, como era por ejemplo la formación reglada en la finca de Castro Enríquez de carácter superior o los cursos de garantía juvenil que se iban a poner en marcha, junto con el gobierno central o los programas de apoyo al autoempleo rural, incremento de 1,7 millones de ayuda a domicilio, cuyo núcleo fundamental era el empleo rural de mujeres. Más de 20 millones en planes de apoyo a municipios. Eso eran hechos, lo demás demagogia y antes habían hablado de populismo y le pidió que se lo aplicaran en este asunto, pues se jugaba con un problema acuciante como era el de la despoblación que no se arreglaba con unas cuantas medidas.

Tras el debate, la propuesta que antecede fue rechazada por mayoría, con los votos en contra de los trece Diputados del Grupo Popular, con los votos a favor de los nueve Diputados del Grupo Socialista y uno del Grupo Ganemos Salamanca y con la abstención de un Diputado del Grupo Ciudadanos.

6.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ESTA DIPUTACIÓN SOBRE LA COORDINACIÓN NECESARIA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición presentada por el Grupo Socialista de esta Diputación:

“El pasado día 7 de enero, como ustedes saben, se produjeron importantes inclemencias meteorológicas que acarrearón serios problemas a miles de ciudadanos de la provincia de la Salamanca que se vieron bloqueados en carreteras tanto de nacionales, comarcales y provinciales. Fenómeno meteorológico que estaba anunciado con varios días de antelación y aun así nos pilló desprevenidos y sin un plan de actuación invernal establecido.

No voy a enumerar nuevamente las consecuencias de esta falta de previsión que se produjeron el día 7 y los días 8 y 9 con las placas de hielo que se formaron en nuestras carreteras como consecuencia de no haber actuado el día 7 retirando la nieve.

El Sr. Vicepresidente ha reconocido en comisión que antes existía un plan conjunto de actuación invernal, donde la Diputación y la Junta de Castilla y León se ponían de acuerdo para actuar en ciertas carreteras. Pues bien, desde este Grupo entendemos que se debe incidir y trabajar para que nunca más se pueda volver a dar esta situación.

Creemos que es necesario establecer un protocolo de actuación conjunto con la Subdelegación de Gobierno, la Junta de Castilla y León y esta Diputación Provincial, para que se puedan compartir los medios técnicos y de esta manera evitar una disputa absurda de competencias, que el pasado 7 de enero solo hizo que el problema se agravara y no diera una solución efectiva a los ciudadanos que permanecieron incomunicados durante dos días.

Por lo expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Salamanca, propone la siguiente moción:

- Que se establezca, junto a la Subdelegación del Gobierno y la Delegación de la Junta de Castilla y León, un plan de viabilidad invernal integrado por las tres instituciones referidas que dé una respuesta conjunta ante situaciones como la acaecida durante este mes.”

D^a Carmen García Romero intervino para decir que la moción era consecuencia de lo sucedido los días 7, 8 y 9 de enero con las placas de hielo que se formaron en nuestras carreteras y los cortes de las mismas, y pedía que existiera un plan de coordinación entre la Subdelegación de Gobierno, la Junta de Castilla y León y esta Diputación Provincial para dar una respuesta conjunta ante situaciones como la acaecida durante este mes. Esta colaboración existía antes y habría que retomarla, pues nadie

entendía que, ante estos problemas, se estuviesen hablando de competencias en lugar de compartir los medios, lo que generaría una mejor respuesta.

D. Gabriel de la Mora González dijo que estaba a favor de la propuesta, pues tal vez sería bueno unas reuniones de estas administraciones con más frecuencia para evitar situaciones como las vividas.

D. Manuel Hernández Pérez intervino para señalar que creemos que después de lo vivido por la nevada de primeros de enero, donde se pudo comprobar la descoordinación de todas las administraciones, vemos razonable el establecimiento de un plan invernal donde estén todas las administraciones implicadas y desde el que se pueda coordinar a todos los equipos para mayor eficacia de los medios y restablecimiento de la normalidad y no ver situaciones donde un quitanieves no seguía en la carretera por no ser de su titularidad. Por ello votaría a favor.

Toma la palabra D. Carlos García Sierra para manifestar que la Diputación tenía dividida la provincia a efectos de conservación y vialidad invernal en tres zonas y las empresas adjudicatarias de la conservación disponían en la zona 1 y 2 de un camión quitanieves y la zona 3, zona de Béjar y parte de la comarca de Ciudad Rodrigo disponía de tres, ya que la Sierra de Béjar y la de Francia, eran las que más episodios de vialidad invernal acumulaban además, se disponía de otros tres camiones en el parque de maquinaria. Añadió que el operativo se activa ante el aviso de incidencia meteorológica, se contactaba con las empresas de conservación y con los capataces de brigada, además los capataces estaban en contacto con la dirección General de Tráfico a través de la Guardia Civil de Tráfico y ante avisos de éstos se organizaban los servicios y eran los capataces los que daban las órdenes adecuadas. En relación con las demás administraciones todas compartían la información de los medios que se disponían y donde se hacía uso de ellos.

Sí quería decir que, ante la magnitud de la nevada del día de Reyes, era muy difícil coordinarse, pues los medios de que se disponía, que eran los normales para situaciones habituales, resultaron insuficientes y no podía ofrecerse a otros la maquinaria pues estaba trabajando, cosa que sí ocurría en situaciones normales y puntuales de vialidad invernal. Por ello, aunque no negaba que podía colaborarse más, lo cierto era que en situaciones normales la colaboración existía.

La Sra. García Romero dijo que, aunque el Sr. García Sierra lo viera así, en la práctica no ocurrían las cosas así, pues en los días referidos en la carretera comarcal 517 en el acceso a la rotonda de la carretera de Florida de Liébana estaba lleno de nieve y aunque pasó la máquina quitanieves de la Junta de Castilla y León no limpió ese acceso y era esa una carretera complicada por la pendiente que tenía. Y era a eso a lo que se refería con la coordinación, que si pasaba la máquina de la Junta limpiara la carretera para evitar peligros a los usuarios. Lo mismo sucedió en los accesos al municipio de San Martín. Ellos no negaban que hubiera colaboración, pero en esos episodios puntuales actúen sin que hubiera que pedirles el favor. Eso era lo que llamaban plan coordinado que

si había una máquina en el lugar no tuviera que desplazarse otra y podría fijarse un protocolo.

El Sr. Hernández Pérez señaló que era necesario el protocolo de actuación entre las diferentes administraciones.

El Sr. García Sierra respondió que volvía a repetir que en circunstancias normales si estaba una máquina en lugar próximo y existía un aviso por parte de las autoridades responsables se intentaba llegar y ayudar y así ocurría entre la Diputación y la Junta, no lo sabía exactamente si así ocurría con la Administración del Estado. En cuanto al episodio referenciado él tenía claro que si la máquina no hubiera tenido que seguir trabajando por la comarcal 517, hubiera limpiado ese tramo. Había pues que distinguir entre episodios excepcionales de los habituales y todos los años alrededor del mes de octubre solía existir una reunión entre las tres administraciones sobre vialidad invernal y se trataban los puntos conflictivos y de coordinación, pero todo eso no servía en episodios excepcionales como los referidos del mes de enero. No obstante, se hablaría con la Junta y la demarcación de carreteras para tratar de mejorar lo que se hacía, aunque en situaciones como la aludida, eso iba a ser muy difícil.

Tras el debate, la propuesta que antecede fue rechazada por mayoría, al votar en contra los trece Diputados del Grupo Popular y con los votos a favor de los nueve Diputados del Grupo Socialista, uno del Grupo Ciudadanos y uno del Grupo Ganemos Salamanca.

7.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ESTA DIPUTACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES DE DIABETES EN CASTILLA Y LEÓN, MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la proposición presentada por el Grupo Socialista de esta Diputación para la mejora de la calidad de vida de los pacientes de diabetes en Castilla y León.

D. Carlos Fernández Chanca intervino para decir que presentaba una moción doblemente importante por afectar por un lado a la sanidad y por otro a miles de personas. La diabetes afectaba en España a cerca de seis millones de personas y dos millones no lo sabían lo que obligaba a reforzar la prevención. Señaló como una de las medidas preventivas los sistemas de medición continua de glucosa mediante monitorización, que recogía la moción, y dado que no tenía ningún carácter político, esperaba fuera apoyada por todos los grupos, como había sucedido en otras administraciones.

D. Gabriel de la Mora González manifestó que apoyaba la moción con algunas matizaciones, como era señalar que no servía para todo tipo de pacientes, que debía haberse añadido el componente de la formación y el advertir que los pacientes deberían saber realizar la monitorización. Esto lo había hablado con el ponente y creía se tendría en cuenta.

D. Manuel Hernández Pérez intervino y dijo que consideraba que para los enfermos, el control 24 horas que se tiene sobre su enfermedad provocará una mejora en la calidad de vida, puesto que en cada momento, sabrán los niveles de glucosa y tomar decisiones inmediatamente. Para los padres es un alivio y pueden estar relajados sabiendo que sus hijos están controlados, para deportistas, mujeres embarazadas que harán el día a día mucho más seguro.

Eran partidario de pedir y exigir a la Junta esa financiación para que pueda llegar a todos los pacientes y estaban de acuerdo con las matizaciones aportadas por el Sr. de la Mora González, por lo que votarían a favor.

Toma la palabra D. José M^a Sanchez Martín quien manifiesta que ésta era una copia de la presentada en las Cortes por el Grupo Socialista. Estaba de acuerdo con el Sr. Fernández Chanca en que era una tecnología que mejoraba la calidad de vida del paciente y también con el Sr. de la Mora González en cuanto a que debían ser los profesionales sanitarios los que supervisaran la aplicación de esta tecnología. Destacó la labor que había efectuado el Partido Popular en Salamanca en cuanto a dotar a los pacientes de las nuevas tecnologías, como aparataje, hojas de insulinas, tiras y el mantener un diálogo continuo con las asociaciones de diabéticos en la provincia.

Respecto al contenido de la moción añadió que ellos habían ido por delante, pues se habían reunido con la asociación de diabéticos, que les habían expuesto la necesidad de la monitorización continua de glucosa y a través del Presidente de la Diputación, se había celebrado una reunión con el Consejero de Sanidad y esperaba que en poco tiempo estuviera incorporada al sistema esta tecnología. Pero ellos querían ir un poco más allá de la moción, pues sería importante para los diabéticos de toda España el que se incluyera el instar al gobierno de la nación para que este tipo de tecnología fuera incluido en el sistema nacional de prestaciones y si el ponente y los demás estaban de acuerdo, pedía incluir ese añadido a la proposición, así sería más completa y todos los diabéticos lo agradecerían.

El Sr. Fernández Chanca señaló que, en cuanto a si la moción presentada era una copia, debía entender que él formaba parte del Partido Socialista y presentaba la moción en las instituciones que estaban representando, así como el Grupo Popular había presentado la misma moción sobre la prisión permanente en varios sitios, por lo que el argumento era flojo.

Añadió que él creía que más que ir por delante iban a remolque, pues la reunión mantenida con las asociaciones de diabéticos se había producido el día 15 de diciembre,

posterior a las iniciativas del Partido Socialista tanto a nivel nacional como regional. Por eso dijo que de cara a sacarse la foto sí iban por delante, pero en cuanto al trabajo a remolque. Aceptaba la propuesta del Sr. Sánchez Martín pues era una propuesta del Grupo Socialista que en noviembre de 2017 ya había solicitado esa inclusión en el sistema nacional de prestaciones en una PNL en el Congreso.

El Sr. Sánchez Martín respondió que a pesar de lo que dijera el Sr. Fernández Chanca, ellos gobernaban en Salamanca y podía preguntar a las asociaciones de diabéticos cuál había sido el trato que les había dado el Grupo Popular, Señaló que ellos trabajaban en el silencio, desde la experiencia, con medidas que ponían en práctica como ya había expuesto, trabajaban con asociaciones para resolver sus problemas que a veces no eran fáciles, de ahí el apoyo a esta moción, pero querían ir más allá y era el instar al gobierno de la nación para que esta tecnología se integre en el catálogo del sistema nacional de la salud.

Debatida la propuesta, se propone cambiar el sentido de la misma, quedando definida de la siguiente manera:

“La diabetes afecta en España a cerca de seis millones de personas lo cual evidencia la importancia de esta enfermedad, debido a su alta incidencia. Más de 2 millones de españoles no saben que padecen la enfermedad. Lo cual hace necesario mejorar la prevención y el control de la enfermedad, para lo cual es muy importante la aplicación de estos dispositivos.

En la actualidad existen sistemas de medición continua de glucosa mediante monitorización, que mejoran sustancialmente la calidad de vida de pacientes con diabetes, especialmente en los menores de edad.

Estos sistemas permiten reducir el número de glucemias capilares necesarias, así como los ingresos hospitalarios, realizando una función preventiva al evitar importantes problemas de salud que provoca el mal control de los niveles de glucosa.

Con ellos, al conocer las tendencias de forma continua de la glucosa, el paciente sabe en todo momento cómo actuar, con el objetivo de evitar caer en hipoglucemia o hiperglucemia, ya que se puede comprobar los efectos de los diferentes alimentos en cada paciente. Además, se evita que el paciente, en muchos casos niños, tenga que hacerse entre 5 y 7 mediciones de glucosa, pinchando sus dedos para extraer sangre. De igual modo si utiliza la monitorización continua de la glucosa no es necesario despertar cada noche a menores de edad para controlarles manualmente el nivel de glucosa, con el objeto evitar las hipoglucemias nocturnas.

En los últimos años numerosas comunidades autónomas de España han incorporado a su cartera de servicios la monitorización continua de glucosa, algo que no se realiza aún en Castilla y León, con el consiguiente agravio hacia los enfermos de diabetes de nuestra Comunidad Autónoma.

Es por todo ello por lo que el Grupo Socialista somete al Pleno de la Diputación para su aprobación el siguiente acuerdo:

Instar a las Cortes de Castilla y León a que adopte las decisiones que sean necesarias para que, el SACYL incorpore la monitorización continua de glucosa entre las prestaciones que se realizan en la Sanidad Pública de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, instar al Gobierno de la Nación para que esta tecnología se integre en el catálogo del sistema nacional de la salud.”

Tras el debate, la propuesta que antecede fue aprobada por unanimidad de los veinticuatro Diputados presentes de los veinticinco que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

8.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ESTA DIPUTACIÓN SOBRE LA LISTA DE ESPERA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición presentada por el Grupo Socialista de esta Diputación:

“Durante los últimos años los datos conocidos de listas de espera en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, tanto para intervenciones quirúrgicas, como para consultas con especialistas y pruebas diagnósticas, han sido los peores del conjunto de Castilla y León.

Así según la lista de espera quirúrgica a 31 de diciembre de 2017 un total de 5093 personas se encontraban esperando una intervención a esa fecha, con una demora media de 125 días. Ambos datos son los más negativos de toda Castilla y León.

A pesar de esta grave situación la mayoría de los quirófanos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca están cerrados por la tarde y la única decisión que ha adoptado la Junta de Castilla y León es privatizar la realización de algunas operaciones quirúrgicas, para lo que los pacientes deben desplazarse a otras provincias, donde no son atendidos en caso de complicaciones una vez que hayan regresado a sus domicilios.

Igualmente, las cifras de la lista de espera de consultas de especialistas a 30 de septiembre de 2017, que son los últimos conocidos, establecen que 28.352 personas estaban en esa fecha pendientes de cita, lo que significa de largo el complejo hospitalario de Castilla y León con mayor lista de espera para consultas con especialistas. Además, en algunas especialidades la lista de espera para ser citado a una consulta es absolutamente escandalosa, como ocurre con Oftalmología y Traumatología, donde 8.077 y 6.963 personas están pendientes de cita respectivamente.

Además, la Consejería de Sanidad ha anunciado que a finales del presente año 2018 se iniciará paulatinamente el traslado de la actividad sanitaria en la ciudad de Salamanca hacia el nuevo hospital, que debería haber estado acabado en 2014, con lo que es previsible que se produzcan dificultades en el funcionamiento habitual del hospital, que repercutirán negativamente en las listas de espera.

Por todo ello, se somete a consideración del Pleno la siguiente moción:

Exigir a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que apruebe de forma inmediata un plan para disminuir sustancialmente en 2018 las listas de espera en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Este plan debe tener dotación económica suficiente que permita contratar personal sanitario con condiciones laborales dignas para optimizar la utilización de todas las instalaciones hospitalarias de Salamanca.”

D^a Carmen García Romero intervino para manifestar que una de las muestras de que el PP llevaba gobernando en Salamanca eran las listas de espera en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y que también sufrían todos los complejos hospitalarios de la Región. En total 28.352 personas estaban en lista de espera en el sistema hospitalario de Castilla y León. Esas eran cifras de la Junta, pero todos sabían que eran más, pues hasta dos o tres meses de pedir la cita no te incluían en las listas de espera, por lo que eran cifras maquilladas. Estar en lista de espera suponía el empeoramiento de las patologías de los pacientes con motivo de la tardanza, suponía una pérdida de autonomía personal, como era el caso de unas cataratas, enfermedades circulatorias o cardiovasculares...etc. Para la población activa suponía largos períodos de baja que podían conllevar la pérdida del trabajo. Todo esto eran los efectos adversos de las listas de espera. Señaló que en la consulta del Hospital Clínico de Salamanca en Oftalmología y Traumatología se estaban dando cita para marzo de 2019. Frente a eso la Junta de Castilla y León había propuesto llevar a los pacientes a las clínicas privadas para agilizar las listas, pero eso también tenía efectos adversos al tener que desplazar a otras provincias a enfermos con las molestias que ello conllevaba, sobre todo por los traslados. Además, muchos de esos médicos que operaban en clínicas privadas ni siquiera residían en Castilla y León y no hacían el postoperatorio lo que aumentaba los problemas para el paciente.

Por todo ello abogó que se pusieran los medios para evitar estas situaciones y evitar que los salmantinos tuvieran que salir fuera y eso se hacía con un plan y dotando una partida económica que permitiera la contratación de más personal sanitario y con mejor trato laboral y ahora que contaban con el apoyo de Ciudadanos, a ver si era posible acabar con las listas de espera pues no sólo apoyaban al gobierno regional para lo bueno sino también apoyaban a un gobierno que tenía 28.352 personas en lista de espera en el sistema hospitalario de Castilla y León.

Interviene D. Gabriel de la Mora González para decir que la portavoz socialista había sido clara y la situación de la sanidad salmantina era lamentable. Esto generaba problemas a las familias y coste a las arcas de Castilla y León por la cantidad de

reclamaciones que por responsabilidad se estaban interponiendo. Era lamentable la política de privatización que propiciaba estas listas de espera para justificarla. Era esta una política de recortes que durante los últimos años había propiciado el Partido Popular, pero la gente ya estaba harta. Criticó la actitud de Ciudadanos en este sentido por apoyar al Partido Popular en su política sanitaria, lo que debería darles vergüenza.

Toma la palabra D. Manuel Hernández Pérez quien manifiesta que las listas de espera son indicadores de medida de los resultados en salud de las organizaciones sanitarias. Son evidentes las dificultades en la gestión y conceptualización de dichas listas: planificación sanitaria, financiación, sistemas de remuneración e incentivos, sistemas de información y gestión, tipo y características de la morbilidad atendida, necesidades sociales, etc.

La legitimidad social, que hace que el ciudadano esté dispuesto al mantenimiento de un sistema sanitario público, está basada en la capacidad de respuesta a sus necesidades consiguiendo un sistema sanitario seguro, efectivo, eficiente y equitativo. Una lista de espera con unos tiempos de demora adecuados a las necesidades clínicas y sociales de los pacientes es un indicador de buenos resultados y una exigencia ciudadana.

Se entiende, que las listas de espera son el resultado de un déficit en la atención sanitaria, motivada por la insuficiencia de recursos, generalmente ocasionada por la falta de financiación necesaria. También se suele sumar como factor complementario, la gestión inadecuada que ocasiona una baja productividad y rendimiento de los servicios sanitarios públicos.

Para este año 2018, ya hay un acuerdo para que se abran los quirófanos por la tarde, para eso habían llegado Sra. García Romero, para hacer políticas de ciudadanos y poder reducir las listas de espera quirúrgica, un hecho que puede paliar la actual situación. Pero aun así tenemos una larga lista diagnóstica y especialista, que hace que muchos pacientes tarden meses para que se les realicen las pruebas. Este es un problema generalizado en toda nuestra comunidad y que debemos atajar, con el grupo de gobierno del Partido Popular en las Cortes y en otros sitios con el Partido Socialista.

Respecto a la alusión de la Sra. García Romero sobre su colaboración con el gobierno del Partido Popular, le preguntó ¿Cómo gobernaba su compañero Fernández Chanca en Ciudad Rodrigo y con quién? Ellos repartían para todos dependiendo del sitio y las circunstancias.

D. José M^a Sánchez Martín intervino y señaló que aunque agradecía su apoyo, la apertura de los quirófanos por las tardes era una medida implantada hacía tiempo. Miren, las listas de espera son un problema en la totalidad de los servicios públicos de salud y la Consejería está trabajando para reducir la lista de espera, 29 días en el último año, aunque no estaban contentos.

Les pediría que analicemos algunos datos:

La Comunidad Autónoma de Castilla y León es la cuarta con mejores datos en la lista de espera quirúrgica de toda España y para operar era preciso un anestésico. Si no hay ni uno en paro en toda España es muy difícil aumentar las intervenciones.

Resaltar que para el Partido Popular es prioritaria la sanidad pública y universal.

La primera comunidad después de Cantabria con menos convenios con la sanidad privada. En Castilla y León se atiende a la totalidad de personas que necesitan asistencia sanitaria y en el día.

Somos la segunda comunidad que menos dinero destinamos a conciertos privados, la cuarta que menos lista de espera presenta en intervenciones quirúrgicas. Concretamente la Comunidad de Castilla-La Mancha gobernada por Podemos y PSOE presenta un 50% más de lista de espera.

Castilla y León tiene un 1% más de personal sanitario contratado que en el año 2010. Miren un informe de la asociación de la defensa de la sanidad pública pone de manifiesto en el informe de septiembre del año 2017 que la sanidad de Castilla y León es la quinta en cuanto a calidad dentro de las comunidades autónomas, sólo superada por las comunidades forales, pero existen otra serie de indicadores como el barómetro sanitario que otorga a la sanidad de Castilla y León un 6,91 sobre 10. Además, para que viera que se preocupaban por la sanidad salmantina esta semana, hemos mantenido conversaciones con la gerente de salud de área y el gerente de primaria y se está diseñando un plan de colaboración entre atención primaria y atención especialidad para que rotaran sobre el hospital. Existían patologías que estaban en lista de espera, pero también había que ver las derivaciones que se efectuaban a petición del paciente.

Vamos a seguir trabajando pues no estamos contentos, pero tenían la satisfacción de que había muchos pacientes contentos por haber sido tratados en otras provincias y el hecho de que había profesionales que operaban en otras provincias, era una práctica que el Partido Socialista efectuaba en las comunidades donde gobernaban por lo que no podía criticarles. En cuanto a los problemas aludidos por los traslados de pacientes tratados en otra provincia señaló que no era así y que la Sra. García Romero no sabía de lo que hablaba.

La Sra. García Romero intervino nuevamente y señaló que las cifras que había presentado el Sr. Sánchez Martín eran cifras mediocres pues el Partido Socialista aspiraba a ser la primera en el ranking y tener un 10 sobre 10 donde sea y sobre todo en Salamanca, por ello planteaba las dificultades y pedían se solucionaran. Ella sabía de lo que hablaba cuando se refería a los problemas que generaban los traslados de pacientes operados en otras provincias por haberlo padecido, tal vez el que no lo supiera era el Sr. Sánchez Martín. Y lo mismo que le sucedía a ella, le sucedía al resto de salmantinos.

En cuanto al incremento de profesionales, manifestó, que eso sería en Castilla La Mancha, pues en Castilla y León el SACYL tenía 300 puestos menos y en Salamanca 78

especialista menos. Por ello el sistema no era para sentirse orgullosos y había que ponerse a trabajar y sólo había un camino, establecer un plan y pagar las operaciones de los especialistas propios y no pagar a los de fuera.

El Sr. Sánchez Martín nuevamente señaló que se estaba diseñando un plan estratégico en el Complejo donde se tendrían en cuenta estas circunstancias y él estaba de acuerdo en que era mejor pagar a los especialistas que conocían a los pacientes y tener abiertos los quirófanos por la tarde, pero se topaban con un problema importante que era la contratación de anestelistas que ahora no había.

Añadió que su grupo iba a apoyar la moción porque creemos que podemos mejorar hacemos autocrítica y por respeto sobre todo a los pacientes que se encuentran en lista de espera que para nosotros no son números para ustedes sí, porque como siempre cuando veían que se disparaban las listas les atacaban, pero ya estaban acostumbrados por siempre habían utilizado la sanidad para hacer política de desgaste y a partir de ahora lo comprobaremos mucho más, ya verán, pues se iniciaba la campaña electoral.

En el Partido Popular siempre han primado los intereses de las personas frente a los intereses del partido y jamás hemos utilizado la sanidad o servicios públicos, para arañar un puñado de votos, hagan memoria. Recuerden como dejaron España y sobre todo la sanidad, un ejemplo: recortes de un 5% de su salario a todo el personal sanitario, él lo sufrió, por eso podía hablar.

A su juicio, el Partido Socialista debía decir a los ciudadanos que en Castilla y León había problemas, pero debían añadir, cómo estarían si gobernarán ellos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha 50% más de listas de espera, Valencia, donde el TC anulaba los decretos de sanidad, Andalucía. Recordó que se había quejado en un pleno de que en Castilla y León se habían contratado médicos de familia para que atendiera a un niño sano, ustedes en un hospital de Castilla-La Mancha habían contratado un ginecólogo sin tener la especialidad. Por eso estimaba que el Grupo Socialista debía decir a la gente, donde nosotros gobernamos el paciente está peor tratado. Recordó que el Portavoz Socialista en la Asamblea de la Comunidad de Madrid había puesto a Castilla y León de ejemplo. Finalizó pidiendo que no engañaran a los ciudadanos. Ellos sin embargo tenían capacidad de autocrítica y por eso apoyaban la moción.

Tras el debate, la propuesta que antecede fue aprobada por unanimidad de los veinticuatro Diputados presentes de los veinticinco que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

9.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS DE ESTA DIPUTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO DE PROTOCOLO.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos de esta Diputación:

“En esta Diputación no existe ningún Reglamento de Protocolo solo existe un reglamento de concesión de medallas, el cual se aprobó en el año 1.946.

Posteriormente y en sesión plenaria del 25 de agosto de 1.951 se efectuó una reforma de mencionado Reglamento, con el único objeto de no limitar el número de medallas a conceder.

Entiende nuestro Grupo, para que el referido Reglamento se pueda adaptar a las nuevas necesidades y sensibilidades ciudadanas, consideramos que sería necesario la creación de un nuevo Reglamento de protocolo que además de la concesión de medallas, pueda incluir la otorgación de los títulos de Hijo o Hija Predilecta o Adoptiva de la Provincia, y la concesión de otro tipo de distinciones, condecoraciones o diplomas que y que sobre todo acoja aspectos protocolarios de esta Diputación, en el cual se incluyan y fijen los atributos del Presidente y de los señores Diputados y sus usos.

Por ello, proponemos la aprobación en este Pleno el inicio del estudio y análisis en la Comisión que corresponda de un nuevo “Reglamento de Protocolo que regule el Ceremonial los Honores y Distinciones de esta Diputación Provincial” y una vez definido, retorne a este Pleno para su aprobación definitiva.”

D. Gabriel de la Mora González intervino y dijo que votarían a favor dado que era necesario y pidió que se hiciera con consenso entre todos en lo relativo a los honores y distinciones, en lo relativo al ceremonial, a ellos no les interesaba. Pero si pidió que se cambiara el sistema presidencial de concesión y se fuera a un modelo de consenso que reflejara la pluralidad existente en la provincia.

Intervino D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez para señalar que ellos estaban de acuerdo con la proposición y en que se trabajara y se aprobara un nuevo reglamento dado lo obsoleto del actual que databa de los años 40.

Toma la palabra D. Carlos García Sierra para manifestar que apoyaban la moción y de hecho por el servicio de protocolo se estaba trabajando en la elaboración de un nuevo reglamento. Si le quiso recordar al Sr. de la Mora González que, aunque las concesiones se habían hecho a propuesta de la presidencia, siempre se habían consensuado, pues tampoco se habían dado tantas.

D. Manuel Hernández Pérez agradeció el apoyo y argumentó que esperaba, ya que se estaba trabajando en ello, que pronto se tuviera el proyecto y se pudiera consensuar entre todos.

El Sr. de la Mora González por su parte arguyó que él lo que pedía era que ese consenso se reflejara en cláusulas concretas y no se estuviera al albur de que el grupo de

gobierno consensuara más o menos una propuesta, aunque reconoció que sí era cierto que las propuestas de concesión de honores hasta ahora habían sido consensuadas, no obstante, todo se podía mejorar para posibilitar propuestas alternativas.

El Sr. Sánchez Sánchez para añadir a su intervención anterior, señaló que resultaba paradójico que se hubiera tardado más de 70 años en reformar el reglamento de protocolo.

El Sr. García Sierra contestó que, en todo caso, a pesar de esos 70 años se habían debatido cosas importantes en el Pleno y que su grupo apoyaba la proposición.

Tras el debate, la propuesta que antecede fue aprobada por unanimidad de los veinticuatro Diputados presentes de los veinticinco que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

10.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS SALAMANCA DE ESTA DIPUTACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS ACUERDOS ENTRE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS SOBRE LA SEQUÍA.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la proposición presentada por el Grupo Ganemos Salamanca de esta Diputación sobre revisión de acuerdos entre la Junta de Castilla y León y las entidades financieras sobre la sequía.

D. Gabriel de la Mora González intervino para decir que la moción pretendía llamar la atención sobre este asunto y en particular de la Junta de Castilla y León y que se revisara este asunto pues se estaban denegando créditos por parte de las entidades financieras, y en especial y le sorprendía, por parte de Caja Rural cuando tenía un carácter cooperativo y quería saber qué era lo que estaba pasando y si las entidades financieras no estaban cumpliendo se tomaran las medidas oportunas. Por otra parte, pedía que la Diputación tomara cartas en el asunto, se reuniera con las entidades financieras y trasladara la queja de agricultores y ganaderos.

Interviene D. Manuel Hernández Pérez para señalar que no estaban de acuerdo con el segundo punto de la proposición y pidió se retirara. Sí estaba de acuerdo con el primero, que consideraba era importante y que ante el acuerdo que la Junta tenía con las entidades bancarias, se investigara qué era lo que ocurría.

D. José Francisco Bautista Méndez intervino y dijo que la moción llegaba tarde y recordó una presentada por ellos en sesión anterior relativa a que se hicieran efectivas ayudas a la sequía y demás. No obstante, la moción tenía razón en que se estaban denegando avales y pidiendo incluso avales no ya de SAECA sino de familiares. Por otra parte, no le parecía bien personalizar en una entidad bancaria cuando eran todas las que

habían negado el crédito, debiendo revisarse esta situación, pues estimaba, que la situación podía empeorar en el futuro meteorológicamente hablando.

Toma la palabra D^a Isabel M^a de la Torre Olvera quien manifiesta que compartía la preocupación por los problemas que la sequía estaba causando a los agricultores y ganaderos, llevaban semanas hablando con ellos y conocían las dificultades que tenían muchos para obtener las ayudas por sequía y quería dejar claro su apoyo firme e incondicional, por encima de la Junta de Castilla y León, del ministerio y de las entidades financieras. Por eso antes de que se registrara la moción se habían puesto en contacto con el ministerio pidiendo una solución para este problema.

Por todo ello iban a apoyar la moción, pero debía matizar que, en primer lugar, aunque había que instar a la Junta de Castilla y León para que revisara el marco actual, era mejor no particularizar ninguna entidad financiera, pues eran 15 las que firmaron el convenio y 10 una adenda posterior para facilitar el préstamo al margen de SAECA.

Estimaba que había que completar la moción, pues al que había que instar para que revisara el esquema de financiación era al ministerio para que SAECA cumpliera su misión. Por ello lo primero era instar al gobierno para que revisara la función del SAECA y que avalara a los agricultores y ganaderos que tenían un mayor riesgo y a la Junta de Castilla y León para que actuaran ante las entidades financieras.

Respecto al segundo punto y aunque ellos no rehuían la reunión, esta cuestión rebasaba la capacidad de la Diputación, pues sin el aval de SAECA las entidades aplicaban sus índices de riesgo a la hora de conceder préstamos. Por eso creía que debía prescindirse de ese punto y, si era así, y se aceptaba la modificación, ellos estaban dispuestos a pelear ante el ministerio para que la SAECA avalara a los agricultores y ganaderos con más riesgo.

El Sr. de la Mora González agradeció los esfuerzos que se habían hecho por solucionar este asunto que afectaba a muchos agricultores y ganaderos, no sólo a los jóvenes agricultores, y aceptaba las enmiendas propuestas por Ciudadanos y el Partido Popular y añadir esa petición al Ministerio de Agricultura pues era, junto con las Comunidades Autónomas, quienes tenían competencia en este asunto y que la SAECA junto con las entidades financieras pudieran intervenir positivamente en esta cuestión.

El Sr. Hernández Pérez agradeció el que se aceptara la modificación y señaló que era cierto que no sólo afectaba a los jóvenes sino a la gran mayoría de agricultores y ganaderos.

El Sr. Bautista Méndez manifestó que se había hablado en la sesión de despoblación del medio rural y el hecho de contar con financiación en esos momentos difíciles para los agricultores y ganaderos podría servir para conseguir el objetivo de fijar población activa en los municipios. Había que instar al Gobierno, pero también a la Junta, que cuenta con competencias e instrumentos en este asunto pues había pactado con las

entidades bancarias y debía comprometerse para que se cumpliera. Finalizó diciendo que meteorológicamente hablando o cambiaba la situación o se iba a vivir una situación difícil para el año agrícola.

La Sra. de la Torre Olvera reiteró el compromiso de ir hasta el final en este asunto y hacer todas las gestiones que se tuvieran que hacer para buscar una solución a un problema que afectaba a una parte importante de la Salamanca rural. Concluyó diciendo que se alegraba por el tono constructivo del debate que afectaba a todos y en el que todos estaban comprometidos.

El Sr. Presidente para cerrar el debate sometió a votación el asunto con las modificaciones propuestas que eran la retirada del punto dos y el añadir un párrafo que fuera instar al Gobierno de la Nación para que revise el esquema de financiación y se le diera la oportuna redacción para su aprobación.

Debatida la propuesta, se propone cambiar el sentido de la misma, quedando definida de la siguiente manera:

“JUSTIFICACIÓN

La Junta de Castilla y León y ciertas entidades financieras han firmado acuerdos de forma pública para facilitar la concesión de préstamos a las familias del campo de Salamanca afectadas por la sequía y que no contaran con aval de la SAECA (Sociedad Anónima de Caucción Agraria).

Las y los profesionales del campo salmantino llevan muchos meses alimentando a los rebaños a base de piensos y forrajes ante la grave sequía, por lo que la disponibilidad de liquidez económica es fundamental para evitar la asfixia económica de las familias que sí están dando la cara contra la despoblación, resistiendo contra viento y marea en nuestros pueblos y zonas más marginales.

Sin embargo, algunas entidades bancarias están denegando los préstamos que se comprometieron a otorgar. El caso más llamativo es el de Caja Rural de Salamanca, en teoría una entidad de carácter cooperativo y enfocada a servir a la financiación del sector agrario.

Es incomprensible que las entidades financieras, y en especial Caja Rural, incumplan sus compromisos y estén dando la espalda a las familias del campo, a quienes deberían de servir. Por ello, entendemos que es necesario que la Junta de Castilla y León revise los acuerdos con las entidades y tome las medidas correspondientes ante esta situación, también denunciada por las organizaciones profesionales agrarias.

En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno la adopción del siguiente **ACUERDO:**

Primero.- Instar a la Junta de Castilla y León para que revise los acuerdos firmados con las entidades financieras, para facilitar una financiación adaptada a las difíciles circunstancias económicas del campo de Salamanca por la sequía.

Instar al Gobierno de España y a la SAECA para que cumpla su misión de prestación de avales y fianzas para facilitar el acceso de agricultores y ganaderos a la financiación.

Tras el debate, la propuesta que antecede fue aprobada por unanimidad de los veinticuatro Diputados presentes de los veinticinco que son los que de hecho y de derecho conforman el Pleno Provincial.

11.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS SALAMANCA DE ESTA DIPUTACIÓN PARA RECLAMAR UN NUEVO MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN ANIMAL EN CASTILLA Y LEÓN.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente proposición presentada por el Grupo Ganemos Salamanca de esta Diputación:

“JUSTIFICACIÓN

En los últimos tiempos diferentes municipios y comunidades autónomas han asumido el debate político sobre la necesidad de implementar normas y leyes que mejoren los estándares de protección de los animales. Estos debates surgen de la mayor preocupación ciudadana por la defensa y bienestar de los mismos, con medidas como el fin del uso de animales en circos, erradicación de prácticas de crueldad o el establecimiento de verdaderas políticas públicas para prevenir y solventar situaciones de abandono y maltrato.

Esta corporación provincial tampoco debe ser ajena a la necesidad de actualizar una norma, la Ley 5/1997 de 24 de abril de Protección de Animales de compañía de Castilla y León, cuya vigencia superará ya las dos décadas de antigüedad, reflejando ahora importantes carencias que deben ser abordadas a través de los preceptivos procesos legislativos.

Tenemos la obligación, como representantes de los ciudadanos, de trasladar a las instituciones la importancia de la adopción de medidas que también aborden la situación de los miles de animales domésticos y silvestres en cautividad, afrontando debates necesarios en nuestras administraciones y asambleas, que conduzcan hacia una nueva Ley de Protección Animal adaptada a las demandas ciudadanas en esta materia y a la ética del siglo XXI.

Sólo en el último año se han debatido normas similares en las cámaras de Galicia, Comunidad de Madrid o Islas Baleares, así como en varias Diputaciones de Galicia. También Ayuntamientos y Diputaciones de nuestra Comunidad Autónoma se han pronunciado a favor de adaptar la normativa sobre protección animal.

El abandono, el sacrificio como método de control, la falta de apoyo para ordenar de manera responsable las colonias felinas o el propio empleo de animales en espectáculos circenses que rozan la degradación, son aspectos que una futura Ley de

Protección Animal no puede obviar, pues el debate está en la calle.

En consecuencia, por este Grupo, a iniciativa de la Asociación Animalista Libera, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Instar a la Junta de Castilla y León a adoptar aquellas medidas tendentes a la elaboración de un Proyecto de Ley de Protección Animal que sustituya el actual marco normativo.

Segundo.- Colaborar en el impulso de una verdadera estrategia autonómica contra el maltrato y el abandono, que apoye económica y técnicamente a las entidades protectoras y refugios, a través del establecimiento en nuestra provincia de verdaderas políticas de protección animal y lucha contra el abandono.

Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Junta de Castilla y León, a los Grupos Políticos de las Cortes de Castilla y León y a la Asociación Animalista Libera.”

D. Gabriel de la Mora González intervino y dijo que su grupo estaba abierto a propuestas sociales y en ese marco presentaba ésta, promovida por la Asociación Libera Castilla y León y que habían ofrecido a los demás grupos para que fuera conjunta. Reiteró el contenido de la misma y señaló que ya había sido aprobada en la Diputación de Valladolid y en los Ayuntamientos de Valladolid, Segovia y Ávila y pedía se aprobara aquí también.

Toma la palabra D. Manuel Hernández Pérez quien manifiesta:

“Desde tiempos inmemoriales la convivencia con animales ha sido un fenómeno repetido en el marco de todas las sociedades, con la responsabilidad y deberes que ello conlleva.

El incremento significativo en el número de animales de compañía que conviven en los hogares en las últimas décadas ha propiciado una mayor sensibilización por el bienestar de los animales. Y es que debido al mayor grado de desarrollo social y cultural de nuestro entorno y a la convicción de que los animales son sujetos a su consideración como “seres vivos dotados de sensibilidad”, contribuyen a un proceso imparable de incremento de la sensibilización con respecto al maltrato animal.

La preocupación por los animales, afortunadamente, es ya una parte importante de los rasgos de las sociedades más avanzadas, habiéndose desarrollado un sentimiento sin precedentes de protección, respeto y defensa de la naturaleza general y de la vida animal en particular, convirtiéndose en un asunto de índole cultural.

Esta creciente sensibilidad social hace necesaria e indispensable un desarrollo por parte de los poderes públicos de unas herramientas que permitan y aseguren el bienestar y la protección animal.

Hay que reforzar la lucha contra el maltrato y el abandono de animales de compañía con una serie de medidas a través de una estrategia Regional. Esta estrategia debe tener un carácter global e incluir un conjunto de acciones complementarias entre sí que busquen como fin último detectar, combatir y reducir el maltrato y el abandono de animales de compañía en todo el ámbito de nuestra Comunidad.”

D^a Carmen García Romero intervino para decir que, aunque era cierto que la Ley de Protección Animal se había modificado recientemente, también lo era el hecho de que lo expuesto en el punto segundo de la proposición no se recogía escrupulosamente en la ley, por lo que su voto sería favorable a la misma para que se recogiera.

Toma la palabra D. Román Hernández Calvo quien señala lo siguiente: Escucho con absoluto respeto la exposición de su moción. Quiero empezar diciendo que en mi persona y en nuestro grupo encontrará un claro defensor de los animales, de su bienestar y del respeto que como personas civilizadas hemos de procurarle.

Nuestro Grupo y nuestro Partido está comprometido en la lucha contra el abandono y el maltrato de animales. Así ha quedado demostrado, por ejemplo, recientemente con el respaldo y aprobación de la ley de animales de compañía a nivel nacional.

Afortunadamente, nuestra sociedad ha evolucionado hacia un respeto profundo y una sensibilidad absoluta hacia los animales. Y nuestro marco jurídico recoge normativas de ámbito estatal y también autonómico que regulan su protección. A ellas hace alusión en la moción que presenta.

Pero, cuando se presenta una moción en un pleno, tiene que estar argumentada y justificada correctamente. Y los argumentos que utiliza para explicar la necesidad del cambio de la normativa actual son poco sólidos, poco precisos y concisos. Exactamente, le pregunto ¿en qué hay que cambiar la normativa? Qué ley, qué artículo o qué párrafo.

Con una visión tan amplia, tan poco concreta, no podemos aprobar la moción que propone en este sentido.

La Comunidad de Castilla y León ha sido pionera en abordar a través de legislación autonómica la protección y el bienestar animal. Estableció el marco legislativo

básico que crea y desarrolla los pilares necesarios para garantizar la protección y el bienestar de los animales de compañía en la Ley 5/1997. Adicionalmente, la Junta de Castilla y León, también fue innovadora estableciendo en el año 2005 la identificación y registro obligatorio de los animales de la especie canina, cuestión que no ha sido desarrollada hasta tiempos recientes por otras CCAA. Además, actualizó la normativa a través de la Orden AYG/610/2016, de 31 de mayo, por la que se regula el funcionamiento y la gestión de la Base de Datos del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León.

El Sr. de la Mora González nuevamente intervino y dijo que era lamentable la utilización de la expresión genérica en este asunto, y que lo que pretendía la asociación era que se abriera el debate legislativo y cada grupo pusiera sobre la mesa sus propuestas para actualizar la ley y algunos de los debates de la calle se reproducían en la moción tales como el abandono, uso de animales en circos, el sacrificio, y eran aspectos que la futura ley no podía obviar, por lo que no era una moción genérica, sino que abarcaba aspectos clave, como eran los escasos recursos que se empleaban por los ayuntamientos para el caso de abandono de animales y su sacrificio.

Este era un texto preparado para lograr el mayor consenso entre todos como había sucedido en otras diputaciones y ayuntamientos y por ese motivo la asociación le había pedido que no lo retirara para que se vieran las posiciones de cada grupo. La pregunta era ¿si se quería o no mantener el actual marco normativo?, el resto estaba a favor y el Grupo Popular no, e insistió en que él estaba incluso dispuesto a retirarla para que no se votara en contra, pero la asociación no lo quería para que se vieran las posturas de cada grupo.

El Sr. Hernández Calvo señaló que ellos no habían dicho que no estuvieran de acuerdo, pero lo cierto era que si se miraba la actual base regulativa no cabía una nueva regulación normativa. El hecho de que hubiera comunidades autónomas que ahora estuvieran abordando cuestiones ya establecidas por legislación de Castilla y León, no implicaba que ésta tuviera que ser menospreciada, sino que mostraba de manera evidente el liderazgo de la región en el desarrollo normativo de esta materia.

Por otro lado, añadió, era conveniente recordar que la Ley había sido objeto de una profunda actualización con la finalidad de adecuarla a las actuales demandas de la sociedad en relación con el respeto, la defensa y la protección de los animales de compañía. Dicha adecuación se había llevado a cabo a través de la Ley 2/2017 de 4 de julio, cuyo art. 6 modificaba la Ley 5/1997 de 24 de abril, de Protección de los animales de compañía. El art. 2 de la Ley de Protección de los animales de compañía define los conceptos de animales de compañía, animal de producción o fauna silvestre, que se precisa para considerar a un animal abandonado, perdido o extraviado y vagabundo. Por último, en la ley se había establecido un nuevo catálogo de infracciones.

Tras el debate, la propuesta que antecede fue rechazada por mayoría, al votar en contra los trece Diputados del Grupo Popular y con los votos a favor de los nueve

Diputados del Grupo Socialista, uno del Grupo Ciudadanos y uno del Grupo Ganemos Salamanca.

12.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO GANEMOS SALAMANCA DE ESTA DIPUTACIÓN SOBRE REDUCCIÓN DE PLAZAS DE DOCENTES

D. Gabriel de la Mora González intervino y señaló que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León pretendía reducir 31 plazas de docentes en Salamanca para el próximo curso, siendo el inicio de las negociaciones el día 29 de enero, de ahí la urgencia de la moción.

Por ello proponía instar a la Junta de Castilla y León a que dejara sin efecto su propuesta de reducción de plazas de maestro de educación primaria y profesores de secundaria, en pro del mantenimiento de una enseñanza pública de calidad y en segundo lugar dar cuenta del acuerdo a los Grupos Políticos de las Cortes de Castilla y León y a los sindicatos de enseñanza de la provincia.

Al amparo de lo previsto en el artículo 91.4 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, se sometió a votación la urgencia de la moción. Fue rechazada su inclusión en el orden del día por mayoría, al votar en contra los trece Diputados del Grupo Popular y con los votos a favor de los nueve Diputados del Grupo Socialista, uno del Grupo Ciudadanos y uno del Grupo Ganemos Salamanca.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Intervino D. José Francisco Bautista Méndez para manifestar que en recientes fechas se había reunido el Consejo de Salud del Abadengo, para tratar el asunto de la supresión de una plaza de médico por jubilación y dado el reparto organizativo de una u otra manera se había aceptado dicha baja. No obstante, estaba prevista la baja de dos médicos más por jubilación y el hecho de que estas bajas no fueran cubiertas sí causaba preocupación por lo que rogaba se tuviera este hecho en cuenta y se pidiera a la Consejería de Sanidad que tuviera prevista esta circunstancia a la hora de proceder a la sustitución de dichas bajas.

D. José M^a Sánchez Martín intervino y dijo que quería agradecer la actitud de los alcaldes de la zona de Lumbrales por su implicación en todo este asunto. Era esta zona una de las más afortunadas en cuanto a los puntos de atención continuada pues contaba con dos médicos en la zona y ellos estaba en contacto con la Gerencia de Salud Primaria para que el problema que anunciaba el Sr. Bautista Méndez no se produjera.

Toma la palabra D. Gabriel de la Mora González y sobre el resultado de la petición que había efectuado el Pleno al Instituto Carlos III en relación con la repercusión para la salud de la implantación de la mina de Retortillo, preguntó ¿si se había contestado y qué había sucedido con este asunto?

En segundo lugar rogó que, con motivo de que se había publicado que la Junta de Castilla y León destinaba 100.000 euros para exhumaciones por causa de la guerra civil y el franquismo, solicitaba que la Diputación fuera sensible con este tema y destinara una dotación presupuestaria para colaborar con la Junta y acabar con el estigma de ser el segundo país de la tierra con más personas desaparecidas y que las 900 fosas existentes desaparecieran de la provincia y los muertos fueran honrados y cicatrizaran las heridas. Si esto fuera admitido se comprometía a no llevar más este asunto al Pleno. Pedía una aportación de 15 a 50.000 euros.

En tercer lugar, manifestó que hacía un año el pleno había aprobado una moción para retirar las medallas concedidas durante la época franquista. Ellos habían hecho un trabajo en el archivo para identificar a las personas, la Comisión de Gobierno Interior estaba trabajando en el asunto y se había decidido estudiar políticamente a quienes se retiraban las medallas. Sin embargo, se había enterado que la Diputación había sido demandada en tribunales por la Asociación para la Defensa de la Memoria Histórica, pidiendo lo mismo que ellos para retirar las medallas a personas concretas y el grupo de gobierno había dado orden al Asesor Jurídico para que se opusiese a la demanda con el argumento de que como ya estaban muertos no había que quitar ningún honor, lo que contradecía el acuerdo del Pleno. Durante más de dos meses había pedido explicaciones, se le había dicho que comparecería el letrado en comisión, no era necesario a su juicio, pues tenía la demanda y la contestación y quería saber ¿por qué se había tomado esta decisión?, ¿quién era el responsable? y ¿qué medidas se iban a tomar al respecto, si se iban o no a retirar los honores?

El Sr. Presidente dijo que se le contestaría en el próximo pleno.

Y sin más asuntos de que tratar, a las doce horas y cincuenta minutos el Sr. Presidente declaró terminada la sesión, extendiéndose la presente Acta que firma conmigo el mismo y de cuyo contenido, como Secretario doy fe.

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que este Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del día veintiséis de enero de dos mil dieciocho, contiene cuarenta y cinco folios, numerados del al y foliados del dos al cuarenta y seis.

EL SECRETARIO GENERAL,